

# LA CRISIS MEXICANA, SUS PROBLEMAS ECONÓMICOS Y SUS EFECTOS SOCIOPOLÍTICOS

FRANCISCO R. DÁVILA ALDÁS

El presente trabajo resume los antecedentes de la crisis mexicana que se presenta como una bancarrota financiera sin precedentes en 1982. Se señala que ésta no es de carácter coyuntural sino que responde a desajustes propios de la estructura socioeconómica de la formación social. Se puntualiza que, luego de un largo período de desarrollo sostenido que abarca desde 1930 hasta 1970 aproximadamente, se presentan los primeros síntomas de desaceleración del mismo, que se logran corregir mediante el endeudamiento externo y la inflación. Pero los desajustes vuelven a surgir con mayor fuerza a partir de 1976, aplicándoseles, sin más, una nueva y mayor dosis de la misma medicina. Se destaca que la economía mexicana al parecer reaccionó con éxito en un primer momento, no tanto por las medidas adoptadas sino porque el país experimentó un repentino auge petrolero; posteriormente, en 1981, la inflación, ya persistente, se dispara y la recesión de la economía se da de manera tan drástica y profunda que las medidas adoptadas desde ese entonces, a pesar de la firmeza con la que se las viene aplicando, no han logrado fortalecer la economía. Al contrario, la recesión del desarrollo y la inflación siguen en pie y ya son preocupantes; no sólo por la profundización de la dependencia económica del país sino principalmente por el deterioro del trabajo social de los sectores campesino, obrero, medio y popular y las secuelas de los mismos, que en el campo sociopolítico amenazan con resquebrajar las instituciones consensuales con las que el régimen político mexicano ha mantenido su larga estabilidad.

## I. Antecedentes de la crisis

Abarcan el período histórico de 1935 a 1970, considerado como el momento estructural de sedimentación del complejo juego de la economía y de la política, que cristaliza en las luchas por el poder y configura desde los años cuarenta la peculiaridad de la formación social

mexicana.<sup>1</sup> Su estabilidad política concuerda —aunque no mecánicamente— con su desarrollo económico autosostenido, cuyos efectos de modernización acelerada convierten al país en uno de los de mediana industrialización entre los “subdesarrollados” o tercermundistas.<sup>2</sup> No obstante, el crecimiento económico alcanzado y los efectos sociales inherentes al mismo no han podido contrarrestar los estrangulamientos estructurales manifiestos en desigualdades sectoriales y regionales y en la incapacidad de mejorar las condiciones precarias de existencia de las grandes mayorías.<sup>3</sup>

Este período de la economía mexicana, dentro del cual se ubica el llamado desarrollo estabilizador, entra en crisis a finales de los años sesenta. La primera y la segunda fases de industrialización sustitutiva habían generado en el país un importante mercado interno y una planta industrial diversificada<sup>4</sup> en posesión de empresarios nacionales, aunque los sectores más dinámicos quedaron en gran parte en manos del capital extranjero,<sup>5</sup> además de su extremada dependencia en

1 El trabajo de Rolando Cordera (1982) constituye una síntesis muy rica de la lógica del desarrollo capitalista en México y del Estado que lo promueve controlando las tensiones sociales que éste provoca.

2 Para una comprensión global del desarrollo industrial que se privilegió en México y que, en sus grandes líneas, corresponde también al de Argentina y Brasil, consúltese Ayala *et al.* (1980).

3 Según los datos del censo de 1970, el 35% de la población mayor de 6 años carecía de todo tipo de educación y sólo el 22% del total de la población había completado la primaria. Entre 10 y 12 millones de la población total no comía carne, leche ni pan ningún día de la semana. Por otra parte, sólo el 24% de la población disponía de vivienda propia; en lo que respecta al ingreso, el 50% de las familias de más bajos ingresos sólo recibía el 15% del ingreso personal disponible, mientras el 20% de las familias de más altos ingresos recibía el 64% del ingreso disponible. En fin, mientras el ingreso personal promedio anual del mexicano era de 600 dólares a precios corrientes, el 10% de las familias más pobres sólo recibían 90 dólares. Las diferencias de estos datos son aún más agudas si las establecemos entre la población urbana y rural de las diferentes zonas y estados del país. A no dudar, en 10 años de concentración de los ingresos y del capital entre los grandes empresarios, industriales, comerciantes y financieros estas cifras deben haberse alterado significativamente en perjuicio de las grandes mayorías.

4 René Villarreal describe las políticas gubernamentales en estos períodos aunque descuidando el peso creciente de los condicionamientos internacionales en estas estrategias de sustitución y recomienda una sustitución de exportaciones: petróleo en primer término y luego productos industriales en lugar de productos primarios, que ya se viene realizando desde mediados de los años setenta. Véase a este respecto Villarreal (1977: 67-107; 1981).

5 En las inversiones extranjeras en México existe un claro predominio del capital norteamericano; en 1940 éstas alcanzaban el 64% y en 1970 llegaban ya al 83%. En 1972 la participación extranjera en las empresas fabricantes de metales era del 56%; productos químicos, 68%; hule, 100%; maquinaria no eléctrica, 95%; maquinaria eléctrica, 60% y en las de equipo de transportación, 79%. Véase a este

cuanto a bienes de capital e insumos del mercado externo, lo que las hace altamente vulnerables a las crisis del mismo. Por su parte, la concentración de los ingresos y de la propiedad se había incrementado y la redistribución social, originada en la Revolución de 1910 y en la institucionalización de la misma, que tuvo lugar desde fines de los años treinta hasta mediados de los años sesenta, como medida de unificación nacional y para conseguir el consenso de las mayorías, empezaba a mostrar señales de agotamiento. Así pues, las alternativas de mayor participación en la economía, en la sociedad, en la política y en la cultura de los nuevos contingentes de población, surgidos en las dos anteriores décadas de modernización y de acumulación ingente de riquezas, se veían constantemente frustradas. La represión sangrienta de Tlatelolco en 1968 marca al mismo tiempo el final de un “desarrollo económico sin fisuras profundas” y de una estabilidad política basada en la mediación estatal y el compromiso alcanzados por las viejas bases sociales en las que se sustentó el nacionalismo revolucionario, ya desde hace años inerme.<sup>6</sup>

## II. El desarrollo con inflación en crisis, 1970-1976<sup>7</sup>

Corresponde al segundo momento de nuestro análisis y marca el agotamiento práctico de la alternativa largamente explotada del desarrollo hacia adentro por la vía de sustitución de exportaciones, en el que se intenta iniciar la etapa de expansión hacia afuera por medio de la promoción de exportaciones acelerando la expansión productiva por la fácil estrategia del endeudamiento externo que promueve las fuerzas inflacionarias y provoca la primera crisis económica y financiera del país que se presenta en 1976 y se profundiza en 1982. Ambas, caracterizadas por ciclos consecutivos de inflación recesión y desequilibrios económicos y financieros cada vez más profundos, se dan como resultado de los estrangulamientos estructurales a los que ha conducido el desarrollo del capitalismo en México, con el agravante

respecto: Ceceña (1970); también Evans y Geriffi (1980: 9-61), y Chapoy (1975: cap. III).

<sup>6</sup> El libro de Sergio Zermeno (1978), *México: una democracia utópica, el movimiento estudiantil de 1968*, nos presenta una visión analítica completa de este momento importante de la historia del México contemporáneo.

<sup>7</sup> Para una explicación más amplia de los diferentes aspectos socioeconómicos de este período véase González (1977:25-69); Bueno *et al.* (1977: 9-52); Gribo-mont y Rúnéz (1977: 771-835).

de que este sistema socioeconómico de expansión mundial ha entrado en una etapa de crisis generalizada cuyas manifestaciones más agudas se dieron en la década de los años setenta pero que hasta la fecha hacen estragos en las economías de los países más industrializados. De ahí que la peculiaridad de la crisis de 1982, determinada por las condiciones sociopolíticas y económicas del período, alcance un nivel de agudización muy peligroso. Sus salidas en el corto plazo aún no se vislumbran y en un mediano plazo pueden alcanzar dimensiones más amplias, que deterioren con mayor rapidez el contexto social de estabilidad política puesto que el gobierno no puede dar respuesta inmediata a las carencias económicas que provocan desequilibrios sociales en los sectores mayoritarios más vulnerables a la crisis económica. Ahora bien, se percibe en el período 1970-1976 que la rectificación del modelo de desarrollo que no pudo darse<sup>8</sup> tenía como prioridad el establecer reformas políticas capaces de restablecer el consenso social en deterioro y, por otra parte, corregir el rumbo de la economía, con dificultades para crecer de modo sostenido. Un ambicioso programa de gasto público, financiado con el endeudamiento externo, apuntaba a fomentar la inversión productiva para activar la planta industrial, no sólo para cubrir el mercado interno sino para iniciar la expansión de las exportaciones a nivel internacional. También se orientaba al gasto social para consolidar las alianzas con los sectores obreros, campesinos y populares que ya se habían debilitado en extremo.<sup>9</sup> Efectivamente, la economía se recupera<sup>10</sup> pero provoca el enraizamiento de la inflación, con la secuela recesiva y el deterioro acelerado de la propia economía; hecho que condujo a un mayor endeudamiento externo para curar la enfermedad.<sup>11</sup> Los resultados no

<sup>8</sup> Gerardo Bueno, en Bueno *et al.* (1977), habla explícitamente de un nuevo modelo de desarrollo alternativo al anterior que es el de "desarrollo compartido" donde el crecimiento económico, objetivo prioritario en el modelo anterior era desplazado a un segundo rango, privilegiándose la mejora del ingreso, la calidad de la vida y la reducción de la dependencia externa. Tal estrategia exigía reformas que iban más allá de las invariantes estructurales que el Estado y la sociedad no estuvieron en condiciones de realizar, esto es: viabilizar una alternativa económica y social que implique el mejoramiento de las condiciones de existencia de las grandes mayorías frente a los intereses de las minorías privilegiadas del modelo capitalista vigente.

<sup>9</sup> Parece que el reformismo echeverriista fue prisionero de una lucha que todavía no termina de definirse: el deterioro del proyecto nacional llevado a cabo por la burguesía industrial nacional y sus aliados y el del gran capital financiero que intenta imponerse en el campo político pues ya ostenta el dominio económico.

<sup>10</sup> En 1971 el crecimiento de la economía era de 3.4% mientras en 1973 éste alcanza 7.6%.

<sup>11</sup> A fines de 1970 la deuda externa de México sólo era de 6 mil millones de dólares y en 1976 ya ascendía a 30 mil millones.

se hicieron esperar: el mantenimiento del tipo de cambio fijo frente a una inflación declaradamente mayor que la de Estados Unidos, el mercado principal del país, sirvió para subsidiar la fuga de capitales, que por su magnitud llegó a convertirse en un factor de desequilibrio económico y social.<sup>12</sup> Así pues, en los primeros meses de 1976 la estrategia de crecer con base en el endeudamiento externo, facilitado por la abundancia de capitales inactivamente productivos en sus países de origen dada la coyuntura de recesión de las economías centrales, dieron lugar a la devaluación de 1976.<sup>13</sup> Con ella, el gobierno reconocía que el modelo de desarrollo compartido que se había querido instaurar no era sino un intento de reforma del modelo estabilizador que había ya entrado en crisis.<sup>14</sup> La sociedad mexicana, en sus sectores mayoritarios, había deteriorado en un 50% sus condiciones de vida, mientras que la minoría empresarial, comercial y financiera incrementaba sus ganancias monopólicas. Efectivamente, en la arena social, en el campo económico, político e ideológico se trababa una lucha por un nuevo proyecto nacional dirigido por el capital financiero nacional y sus aliados internos.<sup>15</sup> De ahí las luchas entre sectores de la burocracia política por influir decisivamente en la manera de utilizar la contrapartida financiera del excedente petrolero<sup>16</sup> (que a partir de 1976 empieza a fluir) para profundizar el desarrollo económico y social sin dependencia o para crecer incrementándola.

### III. Crisis inflacionaria y recesión del desarrollo, 1976-1982

La crisis económica de 1976 y su resolución se dan dentro de un creciente debilitamiento de la actividad estatal para intervenir en la

12 Se calcula que el monto de capitales fugados en 1975 alcanzó los 2 191 millones de dólares y en 1976 los 4 mil millones; cifras realmente muy altas si se toma en cuenta que la deuda externa de corto plazo en 1976 era de 3 mil millones de dólares.

13 Para mayores precisiones sobre los efectos de la devaluación y el manejo de la economía a partir de ese año consúltese Samuel del Villar, "El manejo y la repercusión de la economía mexicana en crisis (1976-1978)", en *Foro Internacional*, El Colegio de México, abril-junio de 1979, p. 542 y ss.

14 Véase a este respecto Reynolds, C. W., "Why Mexico stability development was actually destabilising (with some implications for the future)", *Subcommittee on Inter-American Economic Relationships, Hearings*, Washington, Congress of the United States, 1977.

15 Cf. a este respecto Tello, C., *La política en México, 1970-1976*, México, Siglo XXI, 1979, p. 208.

16 Fitzgerald (1978: 229-233) identifica algunos sectores de la burocracia

economía. Las presiones internas de los sectores comerciales y financieros, fuertemente consolidados, junto con las de la banca internacional, a la que hay que recurrir para financiar el gasto público dedicado a las inversiones estratégicas, conducen a una serie de contradicciones económicas, políticas y sociales que a la larga desembocan en la gran crisis de 1982. En ésta, el proyecto hegemónico nacional, ya debilitado, parece dar lugar, no sin luchas intraestatales, a uno nuevo, que poco a poco parece consolidarse trayendo tras de sí un deterioro constante de los niveles de vida de los sectores populares y medios profesionales y una integración más estrecha con el capital monopolístico internacional por la vía de las inversiones más dinámicas (metal-mecánica, química, hulera, de maquinarias y equipo de transporte), favorecidas por nuevas leyes y estímulos gubernamentales.<sup>17</sup>

#### *a) Un difícil trance, 1976-1978*

El gobierno del licenciado José López Portillo inaugura su mandato dentro de los más serios problemas económicos de los últimos 35 años. De modo solapado, la inflación va mermando los niveles de vida no sólo de los sectores populares sino de los sectores medios profesionales. El sometimiento a la política del Fondo Monetario Internacional, con sus mecanismos restrictivos y de sujeción salarial, pudieron haber profundizado la recesión económica de 1976, pero el inicio del

política en conflicto que por un lado sugieren un fortalecimiento del sector nacional de la economía mediante el gasto público y el fomento de la industria y por otro intenta facilitar la entrada de las inversiones extranjeras para el impulso de las exportaciones de bienes manufacturados. El mismo autor, en otro de sus artículos precisa que se trataba específicamente de desacuerdos entre las "autoridades monetarias" (Hacienda y Banco de México) y las "planificadoras" (Secretaría de la Presidencia y la de Patrimonio y Fomento Industrial) con respecto a un diferente modelo de desarrollo nacional; véase "La política de estabilización en México: el déficit fiscal y el equilibrio macroeconómico de 1960 a 1977", en *Investigación Económica*, Facultad de Economía, UNAM, abril-junio de 1978, p. 202. Para una comprensión más amplia de los aspectos sociales y políticos de las contradicciones del período al que nos referimos véase, Labastida (1972).

<sup>17</sup> Nos referimos a los que se encuentran detallados en el documento intitulado "Lineamientos sobre las inversiones extranjeras y propósitos de su promoción" dados a conocer el 19 de febrero de 1984, donde se señala que dada la situación económica imperante se requieren nuevos recursos de capital, por lo que se propone aumentar la inversión extranjera en su capital social, mediante la capitalización de sus pasivos, venta de acciones o renuncia de los accionistas mexicanos. Se señala también las actividades industriales prioritarias para recibir inversiones extranjeras directas.

auge petrolero la aminoró y pronto aceleró el desarrollo de la economía mexicana.<sup>18</sup> Esto permitió al gobierno recuperar la capacidad política para emprender una serie de reformas conducentes a la modernización del país<sup>19</sup> sin descuidar el consenso social necesario para iniciar el reajuste crítico. La magnitud de los excedentes petroleros permitió salir rápidamente de la fase aguda de la crisis y alcanzar altas tasas de desarrollo. Se volvería a crecer para salir de la crisis y se iniciaría luego la etapa del reparto social de las riquezas. Ésta era la estrategia a seguir. Sin embargo, para fines de 1978 la inflación ya estaba enraizada fuertemente en la economía mexicana, aunque el crecimiento se prolongaría por dos años más.

*b) Las ilusiones de un auge repentino, 1979-1981*

El auge petrolero brindó la oportunidad de atacar de modo general los problemas de la economía y los de la política. La producción creció a tasas muy elevadas (10%); sin embargo, para 1979 algunas de las industrias empezaron a experimentar problemas de expansión. Poco a poco, en la economía del país y en la sociedad se venían insinuando las tendencias a la petrolización,<sup>20</sup> cuyos efectos negativos irían anulando a los positivos. Una vez más, el gasto público, fundado en la bonanza petrolera, fue el factor más dinámico del desarrollo económico (véase Gutiérrez, 1983: 28). En 1980 la economía trabajaba al límite de su capacidad y las presiones infraestructurales se multiplicaron: insuficiencia del transporte y falta de insumos y materias primas.<sup>21</sup> Los cambios de política económica para hacer el aparato productivo más eficiente no dieron los resultados que se esperaban; la resistencia de los empresarios, comerciantes y financieros era grande; las expectativas inflacionarias y la especulación con el dinero, dadas las altas tasas de interés, aceleraron la dolarización bancaria: las dificult-

18 A partir de 1977 el sector petrolero aumenta su participación en el producto, de 4.2 a 6.9% en 1980 y sólo en el espacio de un año, vale decir, entre 1976 y 1977, el valor de las exportaciones petroleras subió 135%, lo que en términos de dólares equivale a 988 millones.

19 Éstas se concretan en la reforma política, administrativa y económica, sobre todo en las dos primeras; véase a este respecto Basáñez (1981: 165-168).

20 *Cfr. Economía Petrolizada*, Taller de Coyuntura, Facultad de Economía, UNAM, México, 1981.

21 Para no parar la producción el gobierno se vio obligado a importarlos, lo que tornó más vulnerable a nuestra planta productiva. La compra de bienes en el extranjero, que en 1979 representaba el 87% del total de la estructura de las importaciones, se incrementó.

tades financieras ya se hacían sentir. Los créditos externos para financiar el desarrollo se conseguían a costos muy altos, con incidencia directa en la deuda externa que crecía peligrosamente. Las presiones de la demanda se incrementaron y para no comprometer el crecimiento económico se subsidió con los excedentes petroleros la importación de bienes de capital, pero también la de bienes de lujo; con lo que la balanza comercial se volvió deficitaria. Por su parte, las industrias monopólicas incrementaron sus utilidades, en detrimento de los sectores mayoritarios del país que seguían depauperizándose con la inflación creciente.

*c) Los primeros indicios de la crisis, 1981-1982*

En 1980 ya se percibían algunos elementos de la crisis, pero es en 1981 cuando el crecimiento de la economía empieza a ser menor que en los años anteriores. De acuerdo con los datos de la CEPAL, el PIB que en 1980 alcanzaba el 8.4% disminuye al 8% en 1981. La producción en su conjunto y las industrias de la construcción y manufacturera, fuertemente dependientes del gasto gubernamental y de las divisas disponibles, empiezan a declinar. Al contrario de lo que suele pensarse, no fueron las bajas del petróleo a nivel internacional las que al incidir en las ventas de fines del año produjeron la crisis; sólo contribuyeron a su aceleración. En efecto, las exportaciones petroleras decrecientes sólo aceleraron el ritmo de la recesión de la economía del país. La merma de las divisas provenientes de las exportaciones petroleras, de manufacturas y otros productos disminuyeron los ingresos del gobierno y éste, para no acelerar los programas de inversión, no tuvo más remedio que acudir al endeudamiento externo, contratando préstamos enormes a altas tasas de interés. Las consecuencias más espectaculares de la disminución de la productividad interna, junto con la caída de las exportaciones petroleras y de otras manufacturas y la elevada deuda externa que terminó en el colapso financiero, se dejaron sentir más fuertemente en 1982. En ese año, la baja de los precios no sólo del petróleo sino de otros productos de exportación, hicieron declinar más aún la tendencia a la baja de la producción interna. La balanza comercial siguió deteriorándose; el turismo, segunda fuente de divisas del país, experimentó su segundo año de rezago, con el consiguiente deterioro de la balanza de servicios y, por ende, la de pagos; hecho que contribuyó a la expansión de la deuda externa,<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Ésta fue proyectada a la enorme suma de 52 960.6 millones de dólares;

cuyos pagos de intereses y amortización ponían al país al borde del colapso económico. Así pues, en 1982 la estrategia fácil de crecer con base en el endeudamiento externo, hipotecando a futuro las riquezas petroleras, conducía inevitablemente a la alternativa de dejar de crecer y estancarse para pagar las deudas.

Para fines de 1981, aunque el informe de gobierno del 1 de septiembre lo soslaya, pues recoge los resultados del crecimiento acelerado de los años anteriores, el panorama económico y financiero de México era sombrío. La política económica seguida en torno al auge petrolero revelaba su estrepitoso fracaso. Se había tratado de cubrir las brechas del crecimiento de la productividad mediante un endeudamiento externo sin precedentes para alejar la crisis; pero ésta se venía encima, justamente por ese mismo lado. En el horizonte de fines de 1981 ya la crisis se vislumbraba y con ella parecía alejarse la posibilidad de convertir las riquezas petroleras en un proceso de industrialización sobre bases permanentes y propias, así como las expectativas de un desarrollo más auténtico y democrático. El peso de las medidas económicas para detenerla no consiguió sino deteriorar aún más los ingresos de los sectores sociales más desprotegidos. Los trabajadores organizados, en su mayoría directamente articulados a la burocracia sindical, apenas pudieron alcanzar un aumento de 38.5% en sus salarios mínimos; monto insuficiente para contrarrestar la pérdida acumulada del poder de compra. Los conflictos laborales, aunque no salieron del marco legal previsto por las instituciones de conciliación de los mismos, aumentaron considerablemente; la mayoría de ellos con el fin de romper el tope salarial del 30%, impuesto por el gobierno, y el resto con el fin de impedir los despidos selectivos y los ceses masivos<sup>23</sup> con los que los empresarios respondían a la contracción económica que ya empezaban a experimentar.

En el plano sociopolítico, el gobierno, a menos de un año de las elecciones presidenciales y en plena campaña electoral, se había debilitado considerablemente; no obstante, para no acelerar la crisis, que ya se veía como inevitable, intentaba negociaciones cada vez más infructuosas con los industriales, comerciantes y financieros, que estando en sus mejores tiempos ya empezaban a sentir el peso futuro de la crisis, por lo que empezaron a poner sus capitales a buen recaudo en el extranjero. En esos momentos, una política de endurecimiento de las medidas administrativas para forzarlos a moderar sus expectativas de ganancia resultaba inviable y podía conducir al enfrentamiento con el

42 206.7 millones pagaderos a largo plazo y 10 753.9 a corto plazo. Cf. datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

<sup>23</sup> Según los datos de las organizaciones sindicales independientes, estos despidos y ceses masivos afectaron a más de 500 mil trabajadores del país.

gobierno que, por otra parte, durante todo el sexenio les había estimulado con mayores incentivos y ganancias. Por otro lado, una política de movilización popular llevada a cabo por el gobierno para fundamentar decisiones capaces de poner diques de contención a las fracciones empresariales y en particular a los financieros e industriales monopólicos, que se estaban tornando en el eje de acumulación del desarrollo del capitalismo en crisis, implicaba un giro rotundo en favor de los sectores campesino, obrero y popular. Lo último, parecía contradecir el esquema de alianzas políticas ya esbozado en la campaña presidencial, que el candidato del PRI desplegaba. Sin embargo, la salida política más viable a la crisis económica que estaba por estallar y que se avizoraba en el poder parecía ser el cierre de un nuevo pacto social con los sectores mayoritarios de la nación. Pero la coyuntura económica de crisis y recesión mundial y el agotamiento del desarrollo basado en los altos precios del petróleo actuaban en su contra; y las fuerzas sociales retardatarias estaban al acecho y no desperdiciarían la ocasión para imponerse.

Entre tanto, en la economía, las inversiones públicas y más aún las privadas ya no se realizaban como al inicio del auge petrolero; por lo que los riesgos de estancamiento de la producción eran inminentes. En el campo social, los efectos del auge todavía se hacían sentir; lo que aminoraba las tensiones crecientes entre los grupos sociales urbanos y, en el agro, las condiciones climáticas favorables permitían incrementos productivos del 5.5 al 6%, que por segundo año consecutivo superaron las tasas de crecimiento demográfico; hecho que sin incidir en un incremento del nivel de vida de los campesinos, sí les procuraba cierto desahogo económico. En el ámbito político, la campaña presidencial, con siete aspirantes a la presidencia, hecho insólito en toda la historia del país, despertaba —más que en otros sexenios— ciertas expectativas de transformación que, poco a poco, se irían esfumando, a medida que el bajo crecimiento económico, la inflación y la devaluación hicieron presa de las grandes mayorías populares.

A principios de 1982, la caída de las exportaciones petroleras y de otros productos como el café, el algodón y la plata pesaban duramente sobre la economía mexicana; no obstante, gracias al endeudamiento externo se había evitado la devaluación, con la que se debía castigar la creciente inflación. Sin embargo, la violenta expansión de la economía, que había llegado a un ritmo de 8 o 9% de crecimiento anual, con la creciente baja de los precios del petróleo y la recesión mundial de la economía aceleraron aún más la inflación interna hasta su desbordamiento, después de un rezago de 3 años. Los precios al mayoreo entre 1977 y 1981 sólo crecieron del 16 al 25%; el tipo de cambio, a su vez, se mantuvo estable entre 22.5 y 23.5 pesos por dó-

lar hasta principios de 1981 y durante el resto del año sólo sufrió un descenso leve, que lo condujo a 26.2 por dólar. En términos reales, el peso se había apreciado en un 30% con respecto a la devaluación de 1977. Según los datos de la banca privada el deslizamiento del peso en 1981 sólo fue de un 12.8%, pero la inflación fue mayor que la de Estados Unidos en un 20%,<sup>24</sup> por lo que el mantenimiento del valor nominal del peso en los comienzos de 1982 castigaba duramente a las exportaciones no petroleras. Estas últimas literalmente se habían estancado, disminuyendo notablemente en su volumen y en su valor absoluto, con repercusiones mayores en la ya deteriorada balanza comercial. También el turismo, segunda fuente de ingresos de divisas del país, experimentaba su segundo año de rezago; deteriorando aún más la balanza de servicios ya debilitada. Este déficit persistente de la balanza de pagos repercutió en una acelerada expansión de la deuda externa, calculada en 75 mil millones de dólares a fines de 1981,<sup>25</sup> suma enorme cuyo pago de intereses y amortizaciones del capital ponía al país al borde del colapso económico. Así pues, en 1982 la estrategia fácil de crecer a base del endeudamiento externo, hipotecando a futuro las riquezas petroleras, conducía a la alternativa de dejar de crecer y estancarse para pagar las deudas, con lo que los sueños del auge petrolero daban lugar a un amargo despertar de carencias y desajustes presentes y futuros.

El gobierno, ante la inminencia de la crisis, no tuvo más que reconocer el fracaso de la fórmula tradicional de crecimiento que ya se había vuelto preferencial. El programa de reajustes que siguió no pudo detener su curso. La inflación se aceleró y la dolarización se incrementó, la fuga de divisas alcanzó montos increíbles y prácticamente el país se había quedado en la bancarrota, pero las utilidades de la banca habían sido las más altas del mundo.<sup>26</sup> La crisis se revelaba incontenible por momentos y parecía que el gobierno a punto de terminar su mandato sería desbordado por la misma.

En efecto, a fines de agosto se llegaba al estallido, con lo que se revelaba la bancarrota económica y la zozobra política reinantes. Además de ello se hacía patente el profundo deterioro estructural que junto con la espuma ilusoria del auge petrolero se expresaban plenamente.

En algunos momentos se sintió que el estallido la había vuelto casi ingobernable; lo que constituía una amenaza inminente de destrucción del resquebrajado conjunto de instituciones sociales que soste-

<sup>24</sup> *unomásuno*, 1 de febrero de 1982.

<sup>25</sup> Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México.

<sup>26</sup> Estas fueron superiores al 108% anual en el período de 1976 a 1982.

nían al sistema. El gobierno, en este trance, no tenía más alternativa que ser arrastrado por la vorágine de la crisis o dar un viraje profundo a su política económica, mediante una decisión política encaminada a recuperar el terreno que la burguesía industrial iba perdiendo frente a los sectores financieros. Se optó, en la desesperación, por la segunda alternativa. Así, pues, el primero de septiembre, en su último y memorable informe (véase Jiménez, 1983: 507-544), el Presidente que pocos meses después dejaría el poder anunciaba, una vez que ya había descrito la bancarrota del país, la nacionalización de la banca mexicana y el control estricto de cambios.

Con este *tour de force*, increíble para la mayoría, la fracción burguesa industrial en crisis retomaba el timón de mando del Estado. Volvía a recuperar, con el consenso social que parecía estar perdiendo entre los sectores populares y nacionalistas, la hegemonía que estaba en entredicho.

Con gran lucidez política, el gobierno arrebató a la izquierda en crecimiento una de sus banderas más queridas y la dejaba por el momento inerte y expectante. Su despertar estuvo encaminado a profundizar la nueva política de la nacionalización bancaria con todas sus consecuencias, preñada de cambios profundos a corto y largo plazo en beneficio de los sectores populares; pero tanto el gobierno nacionalizador, al término de su mandato político como el que lo relevó, insistieron en la salida de la crisis como forma de recuperación, en un plano superior, de los desajustes y contradicciones del sistema capitalista mexicano.

Así pues, la nacionalización de la banca, el hecho político y social más relevante desde la nacionalización del petróleo en 1938,<sup>27</sup> sin posibilidades de ser rescatado como una conquista popular para morigerar las crisis en beneficio de las grandes mayorías, sirve para consolidar por algún tiempo a la ya debilitada fracción industrial nacional, presionada en su pedestal político por la fracción financiera a la que se le arrebató el instrumento principal de sus ganancias.

La reacción empresarial a la expropiación bancaria llegó, aunque con menor vehemencia de lo que se hubiera podido imaginar; tal vez porque se pensaba revocar en la práctica la medida, o emprender negociaciones ventajosas en un plazo de tres meses con el nuevo Presidente; o quizá porque su capacidad de acción política para movilizar a los sectores sociales en contra del gobierno saliente era limitada. No obstante, en esos meses finales del sexenio, que inauguró la crisis más álgida de la historia de México y realizó la nacionalización bancaria, la sorda resistencia que opusieron en el ámbito económico y político

<sup>27</sup> Véase las precisiones que a este respecto realiza María Emilia Paz (1983: 441-451).

hizo mella directa en el quebrantado sistema económico en crisis; hecho que les permitió consolidar una no despreciable base política para pactar con el nuevo gobierno una participación del 34% en la banca nacionalizada y una jugosa indemnización que empezó a hacerse efectiva poco antes de cumplirse el año de la —para ellos— “arbitraria e inconstitucional medida” que encaminaba al país al “socialismo totalitario”.<sup>28</sup>

#### IV. Dentro del túnel: crisis inflacionaria y profunda recesión de la economía, 1982-1984

Podría argumentarse que los atisbos del momento más profundo de la crisis que actualmente sufre el país surgieron de las presiones internacionales causadas por la lucha que desde 1980 sostenían las fracciones burguesas financieras internacionales y particularmente la hegemónica, por incrementos significativos en las tasas de interés,<sup>29</sup> para recuperar por esa vía la lenta pero dura caída de sus cuotas de ganancia.<sup>30</sup>

En verdad, el impacto se dejó sentir fuertemente en la economía mexicana;<sup>31</sup> pero ésta ya se encontraba “sobrecalentada”. La inflación que desde ese momento se desarrolló a ritmos cada vez más vertiginosos ya era alta (22% en 1979), pero su causa no fue tanto el alza de las tasas de interés internacionales que presionaron al alza a las internas sino el incremento de los márgenes de ganancia de los empresa-

<sup>28</sup> Resulta de gran interés examinar cómo las respuestas virulentas de los banqueros, empresarios y de sus representaciones gremiales, frente a las respuestas gubernamentales, van cambiando de tono para volverse conformistas y hasta esperanzadoras. Véanse declaraciones de prensa desde septiembre hasta diciembre de 1982.

<sup>29</sup> En Estados Unidos la tasa prima era en 1979 del 12.67%, sube al 15.27% en 1980 y de allí al 18.87% en 1981; o sea, un incremento del 49% en dos años. Véase: *Excelsior*, 14 de agosto de 1982, sección financiera; también Banco de México, *Boletín de Indicadores Económicos Internacionales*, núm. 4, octubre-diciembre de 1982.

<sup>30</sup> El estudio de Anwar Shaikh, “La actual crisis económica mundial: causas y explicaciones”, *Investigación Económica*, núm. 165, junio-septiembre de 1983, p. 28-30, señala que las tasas de ganancia de Japón, Estados Unidos, Alemania Occidental, Francia, Suecia y Reino Unido, más o menos, desde 1965 experimentan una caída constante, aunque desde luego los niveles y los ligeros repuntes varían de país a país.

<sup>31</sup> Las tasas de interés a corto plazo suben del 17.73% en 1979 al 34.30% en 1981; un incremento del 90% en dos años.

rios mexicanos impulsado por el auge petrolero. No obstante, la inflación internacional acelerada por el alza de las tasas de interés, dada la elevación de los costos financieros de las empresas transnacionales tuvo un impacto significativo en los ya elevados precios de los productos nacionales. Las materias primas y los insumos importados<sup>32</sup> con los que trabajan las empresas monopólicas mexicanas (la gran mayoría de ellas filiales de las transnacionales estadounidenses) y el resto de la planta industrial subieron considerablemente, lo que encareció aún más el costo financiero de las empresas nacionales. Éstas, para no modificar sus altas ganancias las transmitieron a los precios de sus manufacturas. Si a esto agregamos el impacto inflacionario del impuesto al valor agregado que se implantó para incrementar los ingresos destinados al gasto público y los aumentos mensuales de más o menos un punto en promedio a las tasas internas de interés desde 1980, para controlar indirectamente la fuga de divisas, alentada por la libertad cambiaria, podemos afirmar que la inflación se tornó en el mal endémico de México.

En efecto, las altas tasas de interés<sup>33</sup> encarecían el costo del dinero; éste tornaba más altos los costos financieros y los precios tendían rápidamente al alza en un círculo vicioso cada vez más amplio y dinámico. En estas circunstancias, mientras las fracciones financieras y comerciales monopólicas del país disfrutaban de las más altas tasas de ganancias, los grandes y medianos industriales comenzaban a experimentar los primeros estragos de la recesión de la economía mexicana. Cuando el gobierno avizó la pendiente de la crisis trató de implantar una política antinflacionaria para curar el mal, pero el remedio aplicado empeoró el cuadro clínico.

La contención salarial con la que se quiso frenar la escalada inflacionaria, de acuerdo con los dictados de la ortodoxia monetaria de los técnicos de palacio y los subsidios a las empresas a través de bajos costos en los bienes y servicios, no dieron resultado. La presión sobre los salarios tendía a reprimir las industrias de productos básicos y las manufacturas de consumo masivo, acelerándose la producción de bienes suntuarios, la mayoría de los cuales se realizaban con materia prima e insumos importados consumidos por los trabajadores de los servicios privados, de la burocracia, de la banca y los profesionales. Éstos, al disfrutar aún de los coletazos del auge petrolero, presionaban fuertemente sobre la oferta y aceleraban la inflación. Por su parte, el subsidio generoso a las empresas no contribuyó a que éstas, como simplistamente se argüía, incrementaran sus inversiones y baja-

<sup>32</sup> Véase nota 21.

<sup>33</sup> En enero de 1982 éstas ya habían alcanzado el 48.7% y en agosto del mismo año, cuando la crisis inflacionaria se tornaba imparable, alcanzaban el 61.76%.

ran los precios, incrementando la oferta; al contrario, especularon no sólo con sus ganancias sino con el dinero de las inversiones subsidiadas en la banca o empezaron a sacar sus dividendos al extranjero, alentados por la fácil ganancia sin riesgos de ninguna especie. El resultado de estas maniobras no hizo más que transferir al propio gobierno (por la vía del déficit presupuestal, financiado por empréstitos extranjeros a altas tasas de interés) el valor de los bienes y servicios subsidiados.

Así pues, cuando la deuda externa empezó a crecer en forma peligrosa, no le quedó al gobierno más alternativa que disminuir el gasto de inversiones productivas, incidiendo negativamente en los balances de las empresas paraestatales o en los de las privadas dependientes de él, con riesgo de insolvencia económica y bancarota de las mismas; hecho que no sólo aceleraba la depresión de la economía sino que creaba zozobra social en los trabajadores de las empresas.

Sin frenos posibles, los precios internos siguieron creciendo a tasas considerablemente más elevadas que los precios internacionales, lo que trajo como consecuencia, para comienzos de 1981, fuertes presiones devaluatorias. No obstante, se optó por minidevaluaciones, llamadas deslizamientos, que llevaron a nuestra moneda a 26.2 pesos por dólar. Con esta medida se evitó, al menos en ese año, una fuerte devaluación, que hubiera acentuado aún más la inflación persistente, con peligros sociales y políticos no deseados a escasos meses de la elección presidencial y a menos de un año del cambio de gobierno.

Pero esta política minidevaluatoria que, técnicamente, sólo pudo darse incrementando los ingresos petroleros y mediante el creciente endeudamiento externo, aceleró aún más la inflación y deprimió a los sectores exportadores no petroleros que sufrían con más fuerza los efectos del peso sobrevaluado. Por lo que los resultados de esta política cambiaria y financiera al iniciarse el crítico año de 1982 estaban a la vista: el país casi había agotado sus reservas, por lo que el gobierno, ante la inminente crisis financiera, no tuvo más alternativa que reconocer el fracaso de la fórmula de crecimiento tradicional vuelta preferencial en el último lustro.

El Banco de México, el 17 de febrero de 1982 (Banco de México, 1982: 293-295), anunciaba la primera de una serie de devaluaciones del peso que sobrevendrían en ese oscuro año.

En seguida vino un “programa de ajustes de la política de México” que intentaba detener el desbordamiento de la crisis, cuando ya ésta había roto los diques de contención. Pero las medidas tomadas, al transcurrir los meses, tornaron aún más duro el modelo de desarrollo desigual fundado en el avance implacable de la dominación monopólica en la economía del país. La inflación se aceleró con la correspondiente escalada de precios, que hizo mella profunda en las economías

de los sectores mayoritarios del país. El proceso de desacumulación interno que dio lugar a la devaluación de febrero, en lugar de apaciguarse se acentuó. No sólo era la cantidad impresionante de dólares que el gobierno debía pagar por intereses y amortización de la deuda externa sino un buen porcentaje de la plusvalía nacional que se dirigía al extranjero en forma de turismo, de inversiones foráneas, o buscando protegerse de una nueva devaluación que se veía como inminente.

Por otra parte la captación de dólares por parte de la banca privada y mixta, que a fines de 1981 representaba el 31.5% creció más aún y, con ello, las utilidades de las fracciones financieras.<sup>34</sup> En la arena política, la crisis económica creciente empezó a rendir sus frutos. A raíz de los reajustes salariales de emergencia, exigidos por los obreros para mitigar el alza de los precios de los productos de primera necesidad, se vislumbró la creciente debilidad del gobierno frente a los empresarios, cuya agresividad verbal expresaba su creciente poderío económico y buscaba bases para influir directamente en las decisiones políticas presentes y futuras. Al parecer, el poder de decisión concentrado en el Estado, es decir, en el juego de las fuerzas de las fracciones burguesas industriales nacionales era disputado por las fracciones burguesas industriales, comerciales y financieras monopólicas que, al llegar a tener el dominio absoluto del campo económico, intentaban dar el salto al campo político y detener la hegemonía social. Pero esta lucha que se evidenciaba en el campo económico mediante una política de austeridad contradictoria con incidencias directas en los programas de alimentación y empleo destinados a contener los ya mercados ingresos de las clases trabajadoras y que tenía como arma un monetarismo ultramontado, cuyos castigos a la pequeña y mediana industria contrastaban con los subsidios millonarios a los grandes capitales monopólicos, resultaba más ardua y compleja en el campo político. Ahí, la burocracia estatal, en sus más altos rangos y en sus destacamentos intelectuales más lúcidos, seguía representando y apoyando la alternativa de la fracción burguesa industrial nacional frente al proyecto de las fracciones industriales y financieras monopólicas, aliadas o dependientes del capital extranjero y todavía fincaba sus esperanzas en la industrialización sobre bases propias, como forma de lograr un desarrollo capaz de hacer justicia a las masas populares que fueron artífices de la Revolución de 1910, ya casi extinguida, pero en la cual todavía creen. No obstante, en mayo y junio de 1982 la co-

<sup>34</sup> Según un estudio del Banco de México ganó hasta el momento de la nacionalización 17 496.2 millones, de los cuales 8 622.9 millones correspondieron a "utilidad por cambios".

yuntura económica era especialmente difícil, pues la crisis de la producción arreciaba mientras la bonanza de los financieros iba en aumento, con las secuelas sociales de carestía alimentaria, alza de precios e inflación galopante, especulación cambiaria y ganancias fabulosas para la banca. En momentos, se hubiera podido pensar que la crisis, tan difícil de controlar a corto plazo, se le escapaba de las manos al gobierno y, con ello, se estaba al borde de un vacío de poder muy peligroso para el sistema político, porque estaba mermando repentinamente las bases del consenso popular. Pero, bien miradas las circunstancias, o sea, traspasando el campo de las meras evidencias, la incapacidad e ineficiencia del gobierno para poner coto a la inflación y a la escalada especulativa de los precios y del dinero, contribuía al fortalecimiento de los sectores comerciales, empresariales y financieros monopólicos cuyos desafíos en el plano económico y político al gobierno apuntaban no tanto a desconocer el Estado que los apoyaba y sostenía sino a contribuir con mayor fuerza al deterioro de la capacidad de lucha de los sectores obreros, campesinos y populares que, junto con los sectores medios asalariados, venían soportando casi todo el peso de la crisis económica. No se trataba pues de una pérdida del consenso social sino de un deterioro político de las organizaciones de masas, tanto de las unidas al yugo del gobierno por la intermediación del PRI como de las independientes, demasiado débiles aún para poder presentar alternativas de cambio a toda la sociedad mexicana.

En estas circunstancias, las estrategias de austeridad y sacrificio impuestas a las clases trabajadoras para sostener los intereses de la burguesía industrial en crisis y/o fincar las bases para cimentar la nueva hegemonía de las fracciones financieras monopólicas, podían aún profundizarse, sin peligro de generar tensiones directamente encaminadas a desquiciar el sistema político de dominación y sus instituciones de consenso.

Por otra parte, aunque la crisis ya revelaba algunos indicios de descomposición social entre los sectores semiproletarios y subproletarios de las urbes más pobladas y mientras los sectores medios y de profesionales sentían en carne propia el deterioro de un sistema político (colmado por una serie de arbitrariedades y corruptelas de la burocracia administrativa, incapaz del buen manejo de los servicios necesarios para la convivencia social como el transporte, la limpieza y las obras de infraestructura y vivienda), no se había quebrantado todavía, en el ánimo del pueblo mexicano, la esperanza de una salida airosa, como acaeció durante la crisis de 1976.

El clima de cierre de campaña electoral que a la sazón imperaba; las expectativas puestas en las promesas del candidato del PRI que el 4 de julio de 1982 se convertía en el Presidente de todos los mexicanos,

ratificando la hegemonía absoluta del partido del gobierno, contribuyeron a paliar los efectos directos del deterioro acelerado que la economía del país sufría en los inicios del segundo semestre del año, dentro del cual la crisis estalló.

Se tenía la impresión —y éste era el comentario público— de que el gobierno sólo esperaba las elecciones y sus resultados inmediatos para, tácticamente, después de un discurso engañoso y soporífero sobre que “la crisis estaba controlada”, anunciar que ésta había tomado un curso acelerado y que lo peor aún no llegaba. Efectivamente, a finales de julio se dieron alzas de hasta el 200% en algunos artículos; los aumentos del precio del pan y las tortillas, alimentos de consumo masivo y los de la gasolina y el gas que siguieron en los primeros días de agosto, recrudecieron la inflación. Pero esto no fue lo último ni lo más duro del año; la espectacular devaluación que se dio con el “nuevo retiro del Banco de México del mercado de cambios” el 5 de agosto y que era una forma disfrazada de presentar un control de cambios dual, justamente en el momento en que las divisas ya se habían agotado, dio más bríos a la crisis, que se presentó con una inflación galopante de más del 100% a fines de agosto y prácticamente paralizó la planta productiva del país.

La ciega apuesta hecha a la ortodoxia financiera por el gobierno y sus colaboradores neoliberales y monetaristas en agosto parecía definitivamente perdida el 18 de febrero de 1982<sup>35</sup> con el aval de los propios apostadores.<sup>36</sup> Pero los verdaderos perdedores, en esos largos seis meses de maduración de la crisis, fueron los sectores campesinos, obreros, populares y la pequeña burguesía asalariada, pues con la inflación en aumento fueron perdiendo de modo vertiginoso sus niveles de vida.<sup>37</sup>

Efectivamente las fuerzas del mercado se desataron a partir de febrero de 1982 y en su libre juego los comerciantes, los financieros y los industriales monopólicos demostraron su poder: los unos impulsando la especulación de precios y cambiaria, a través de la banca, los otros fomentando la dolarización a partir de las ganancias alcanzadas vía elevación de precios y carestía de productos necesarios (Secretaría de Comercio, 1982). Por su parte, el creciente desequilibrio mone-

<sup>35</sup> Ésta consistía en abandonar el peso al libre juego de las fuerzas del mercado; disminuir drásticamente las inversiones gubernamentales; abandonar la política de gasto social y de subsidios al consumo popular, liberar los precios y contratar nuevos empréstitos externos.

<sup>36</sup> El gobierno y los responsables de las finanzas se habían opuesto rotundamente a imponer cualquier control de cambios, menos aún el estricto, como lo exigían las fuerzas de la izquierda.

<sup>37</sup> Entre 1977 y 1982 el salario mínimo real disminuyó 5% en promedio, anualmente.

tario y financiero, que en agosto llegaba a su punto más álgido, había fortificado de modo extraordinario la posición ya fuerte del capital financiero internacional, particularmente norteamericano y, más aún, el poder de sus aliados internos se imponía avasalladoramente en la economía del país.

En el Estado la pugna de las fuerzas del bloque en el poder se intensificaba; las ventas adicionales de petróleo a Estados Unidos,<sup>38</sup> las medidas monetarias y financieras de emergencia del 6 de agosto y las que posteriormente siguieron, entre ellas la inesperada nacionalización bancaria,<sup>39</sup> no fueron más que esfuerzos desesperados por detener el avance de estos nuevos grupos sociales que, ya crecidos en la economía desde fechas tempranas (Labastida, 1972: 133-135) y en el momento crítico, dominándola, pugnaban en lo político por imponer un nuevo proyecto nacional más íntegramente vinculado al desarrollo de las fuerzas mercantiles y financieras del capitalismo internacional.

Indudablemente, después de la espectacular fuga de capitales,<sup>40</sup> de la enfurecida especulación financiera y de la inflación galopante que aceleraron la recesión de nuestra planta productiva, el drástico remedio, la nacionalización bancaria y el estricto control de cambios, fueron medidas económico-políticas que dieron un respiro al gobierno en los últimos meses de su mandato. Pero fueron algo más importante, significaron para las fuerzas burguesas industriales nacionales, creadas, sustentadas y apoyadas por el Estado, la recuperación de las bases políticas para continuar detentando por un tiempo la hegemonía social.<sup>41</sup> Ésta, profundamente arraigada en la revolución nacionalista, impregnada de valores populares y democráticos, todavía permite sustentar un proyecto nacional de acumulación interna de capitales capaz de asegurar la existencia de un país políticamente independiente y soberano mediante el apoyo solidario de los sectores campesinos,

38 Éstas se dieron para cubrir el anticipo de mil millones de dólares que el Departamento de Energía del gobierno de Estados Unidos había hecho al Banco de México para cubrir su insuficiencia de divisas.

39 "Principales medidas económicas adoptadas en agosto de 1982", *Comercio Exterior*, vol. 32, núm. 9, septiembre de 1982.

40 Según cálculos hechos por el presidente José López Portillo en su VI Informe éstos eran alrededor de 42 mil millones de dólares; véase *Comercio Exterior*, vol. 23, núm. 9, p. 934.

41 Hablamos de "hegemonía social y en el gobierno político es decir (del consenso 'espontáneo' otorgado por las grandes masas de población a la directriz marcada a la vida social por el grupo dominante, consenso que surge 'históricamente' del prestigio —y por tanto de la confianza— originado en el grupo prevalente por su posición y su papel en el mundo de la producción" (Gramsci, 1967: 30-31).

obreros y populares, pequeña burguesía y burocracia. Estos grupos fueron los que con la nacionalización bancaria vieron renacer con ilusión sus esperanzas y, aunque por poco tiempo, se sintieron respaldados por un gobierno que parecía, esta vez, velar por sus intereses, ya desde hace décadas conculcados en aras de un etéreo interés nacional y popular.

En verdad el desgobierno y el desorden social instaurado en una economía que se desmoronaba sin bordes de contención política, se detuvieron con el giro del timón del 1 de septiembre. Aún más, técnicamente, al poder controlar con las desesperadas medidas la fuga de divisas se respaldaba el incremento de la captación bancaria y con ello se disponía de financiamiento interno; al lograr garantizar tasas de interés autónomas se abaratarían los créditos para las empresas nacionales y los préstamos bancarios se democratizarían y orientarían hacia proyectos de interés social tales como vivienda, salud, infraestructura, servicios y alimentación. Todo ello desaceleraría la inflación y se volvería a impulsar la economía en beneficio de las grandes mayorías. Éste era el proyecto implícito en la acción nacionalista y popular más significativa de los últimos años<sup>42</sup> que, desde las alturas del poder, generaron los “intelectuales orgánicos” de la fracción burguesa industrial nacional para salvarla de su descenso económico y preservar su hegemonía en franca crisis. Pero el reto político era hacerlo efectivo y esto agudizaba las luchas en el interior del bloque en el poder.

La coyuntura de fin de sexenio no parecía propicia para llevarlo adelante y los problemas estructurales de la economía dificultaban más aún las salidas fáciles. El gobierno saliente empezó a sentir con fuerza los problemas económicos y políticos derivados de las medidas aplicadas.

Los dólares que se necesitaban con desesperación no pudieron ser captados a pesar de que se intentó recogerlos instaurando casas de cambio gubernamentales a lo largo de las amplias zonas fronterizas del país. La fuga de capitales continuó, una pequeña parte en dólares pero el grueso de la misma se realizó en pesos mexicanos, los que fueron captados en los bancos fronterizos estadounidenses o por los especuladores de ambos países para facilitar las necesarias transacciones comerciales entre una frontera y otra. Estas últimas se habían desquiciado repentinamente y con ellas la vida económica y social de los mexicanos sufría serios reveses; los que dieron lugar a protestas y a conatos de levantamientos que el gobierno tuvo que contener con medidas paliativas.

<sup>42</sup> Se la comparó con la nacionalización del petróleo y tanto el PRI como la izquierda la respaldaron; el primero porque “el camino de la Revolución no se

En la imposibilidad real de captar divisas a través de la banca nacionalizada y con un control de cambios burlado en la práctica por el gran comercio y los especuladores financieros, no quedaba más alternativa que solicitar al Fondo Monetario Internacional su aval para volver a demandar préstamos a la banca privada extranjera y con ellos aplacar la furia de la crisis inflacionaria y recesiva.

Ya desde comienzos de septiembre se entablaron negociaciones de alto nivel con los centros financieros internacionales, los que estaban en las mejores disposiciones de ayudar al país siempre que éste garantizara convenientemente sus pagos. La Carta de Intención que el gobierno firmó con el Fondo en los primeros días de noviembre de 1982 hacía explícitas las garantías.<sup>43</sup> No obstante, el dinero de los préstamos no se haría efectivo sino a partir de nuevas y largas negociaciones en las cuales la posición política de México respecto de los problemas de América Latina y de Centroamérica, en particular, así como su larga estabilidad política refrendada por un cambio pacífico de gobierno y su dinámica integración al comercio y a las finanzas de Estados Unidos y el resto del mundo, le sirvieron de asideros positivos.

La salida de la bancarrota del país se veía muy lejos en el horizonte, aunque los costos sociales de la misma se palpaban más cercanos. Esta vez parecía poco probable que un nuevo auge petrolero<sup>44</sup> fuera la tabla de salvación oportuna para salir del túnel en que el país se encontraba; al menos así lo entendió el nuevo gobierno que a partir del 1 de diciembre tomó posesión del poder estatal.

#### *a) Lucha contra la inflación, recesión económica y repercusiones sociopolíticas (1983)*

Un nuevo sexenio se iniciaba en circunstancias críticas, no había dudas: el discurso presidencial de rigor fue austero y mesurado (*Cfr.*

había agotado” y la segunda porque, como bien lo había entendido la iniciativa privada “éstas eran algunas de las metas de su propio programa (el de la izquierda) impuestas por el gobierno en menos de tres meses, contra la voluntad popular”.

<sup>43</sup> Pueden resumirse en lograr el equilibrio de la economía mediante la disminución del gasto gubernamental, la elevación del ahorro interno, el saneamiento de las finanzas públicas por la vía de una mayor tributación y alzas en los precios de los bienes básicos y servicios públicos. Véase “Carta de Intención”, en *Comercio Exterior*, vol. 32, núm. 11, noviembre de 1982.

<sup>44</sup> Según un estudio de la Texaco, el ritmo de crecimiento de los precios reales del petróleo se situará entre 1 y 2% en promedio de 1980 a 1987. No obstante, si se toma en cuenta la demanda creciente a partir de 1987 y la capacidad limita-

Lerner, 1983), palpó la crisis en sus grandes dimensiones e inmediatamente puso en marcha un programa de reordenamiento económico (Madrid, 1982: 1278-1285) en el cual fijaba las grandes líneas de orientación del gobierno a largo plazo y los álgidos problemas de corto plazo que era preciso resolver. Seguidamente se conocieron los lineamientos generales de política económica (*ibid*, 1286-1298) y las nuevas disposiciones cambiarias y financieras.<sup>45</sup> También se dio impulso a una serie de iniciativas jurídico-administrativas para agilizar las medidas gubernamentales de manejo de la crisis. La celeridad con que fueron aprobadas, a más de reiterar el peso absoluto que el Ejecutivo tenía en las cámaras a través del PRI, revelaba la gravedad no sólo del momento, sino del futuro y el temor bien fundado de posibles desórdenes sociales y desequilibrios políticos que podrían sucederse por la severidad de la crisis y por lo drástico de las medidas adoptadas para frenar la inflación ya enraizada en la economía mexicana.

Efectivamente, esta última, calculada en los meses de enero y febrero de 1983 en 110% con relación al mes de agosto de 1982, continuaba carcomiendo los exiguos recursos de las grandes mayorías y enriqueciendo a los comerciantes e industriales monopólicos. La disminución del gasto del gobierno, presuntamente hecha para desalentar la inflación, se revelaba errática, pues sólo conseguía incrementar la recesión de la planta productiva afectando de modo significativo a los pequeños y medianos productores así como a la mano de obra de esas empresas, sin lograr descensos significativos en el nivel de los precios.<sup>46</sup> Abocado el gobierno durante los primeros meses a solucio-

da de producción se puede prever que éstos se incrementarían aceleradamente a partir de 1987 hasta 1994. "Situación y perspectivas petroleras mundiales", *Comercio Exterior*, vol. 34, núm. 2, febrero de 1984, p. 142-150.

<sup>45</sup> En menos de seis meses, con las modalidades de control cambiario que se ensayaron, el peso mexicano pasó de 27 por dólar a los 200 en los momentos de mayor especulación, para luego ser fijado a fines de diciembre en 150 pesos. Con esta paridad tope llamada "libre", que fluctuaría según las fuerzas del mercado y a la que irían acoplándose "la controlada" y "la especial" que luego fue suprimida, nuestra moneda se mantendría con ligeras fluctuaciones hasta el 23 de septiembre de 1983; lo que equivale a una devaluación del 445% en el año más crítico. Desde la última fecha hasta la actualidad nuestra moneda sufre una devaluación diaria de 13 centavos, con lo que llegará en septiembre a 192 pesos por dólar y a finales de este año a 200, de no haber en el transcurso una nueva devaluación, que es lo más probable dada la persistencia de precios más altos que en Estados Unidos.

<sup>46</sup> Además, la recesión económica anunciada oficialmente alcanzaba tasas negativas de menos de dos, pero fue aún más severa, ya que entre enero y abril de 1983 alcanzó un promedio de menos de 9.6, por lo que sus impactos fueron más significativos que los calculados en los niveles de salario y en la estructura del

nar los problemas atinentes a la deuda externa y a controlar la inflación parecía olvidarse de que las medidas adoptadas volvían más difícil la marcha de la economía. La disminución drástica del gasto público incidió de modo notable en la industria de la construcción la cual, medida en términos de su aporte al PIB, decreció en un 16% a partir de 1981. Del mismo modo, la carestía de divisas para la importación de insumos afectó a las industrias de bienes intermedios y de capital, cuyos niveles de actividad descendieron bruscamente hasta ser comparables a los del principio de la década de los años ochenta. La recesión más alta que experimentaba la economía mexicana desde los años treinta no tardó en repercutir significativamente en los salarios y en el empleo de los trabajadores. Con la inflación del 100% en los cinco primeros meses de 1983 y el risible incremento del 15 al 20% en los salarios, la represión económica realizaba en los asalariados un verdadero desfalco de su fuerza de trabajo. Por otro lado, el incremento del desempleo abierto, estimado en un 13% para 1983 y la amenaza de cierres y despidos de trabajadores incrementaron la oferta en el mercado de trabajo; hecho que permitió a los empresarios maniobrar hábilmente para intensificar el trabajo sin la correspondiente respuesta combativa de los asalariados.

Por su parte el gobierno, en su afán de captar dólares para sanear sus finanzas y de disminuir el gasto para frenar la inflación, seguía debilitando a las fuerzas sociales mayoritarias mientras estimulaba a los empresarios y al capital extranjero para animarlos a invertir. La lógica del planteamiento estribaba en que era necesario obtener divisas a cualquier precio en un plazo inmediato para defender la planta productiva y el empleo, lo que a corto plazo aumentaría las inversiones, incrementaría las exportaciones y contribuiría a una mayor generación de ahorros que, a su vez, incidirían en la productividad de las empresas y en el empleo. En realidad, lo que se estaba haciendo era fortalecer a los sectores comerciales y financieros monopólicos internos para anudar con el capital extranjero una alianza más estrecha que conjuraría la crisis productiva mexicana liquidando a las empresas ineficientes en su lucha por los mercados. Éste era el verdadero sentido de la oposición al "populismo financiero", pero los resultados reales que traía esta política no hacían más que intensificar el costo financiero de la planta productiva que, por otra parte, dadas las altas tasas de interés mantenidas y el alto costo de las divisas, no tenía más alternativa que aumentar sus costos productivos y repercutirlos a los

empleo. En lo relativo a los precios, éstos no dejaron de aumentar; algunos de los productos desde agosto de 1982 habían hasta quintuplicado sus precios. Véase a este respecto Banco Nacional de México, *Examen de la situación económica de México*, vol. 49, núm. 691, junio de 1983.

precios de los productos; lo que volvía a generar en la economía presiones inflacionarias que junto con los incrementos causados por la elevación de precios de los bienes y servicios públicos endurecía la recesión y la inflación de la economía mexicana de 1983. Todo esto, a pesar de las declaraciones que el gobierno hacía en contra de esta perniciosa tendencia.

Así pues, mientras en el segundo trimestre de 1983 los impactos retardados de las medidas de política económica vigentes venían carcomiendo los ahorros de los sectores medios y los salarios de los trabajadores, las ganancias de las empresas crecían gracias a la generosa política de liberación de precios, de contención salarial y de renegociación de la deuda privada por parte del gobierno.<sup>47</sup>

En el ámbito sociopolítico el gobierno, con suma habilidad, había maniobrado para no permitir que la crisis desbordara los límites usuales de contención, es decir, para tratar por la vía del consenso los difíciles momentos por los que atravesaba la sociedad mexicana y el bloque en el poder. Apelando no sólo a la renovación moral, al nacionalismo revolucionario y al sacrificio en aras de la crisis, sino a la profundización de la democracia y a la mayor participación de todos los mexicanos en los esfuerzos por salir del *impasse*, la burocracia política y su caja de resonancia, el PRI, pudieron jactarse de que la crisis sólo era económica y que, por tanto, había que amagar el costo social de las medidas de emergencia mediante el control selectivo de algunos precios de los alimentos de consumo masivo y de primera necesidad. Se siguió subsidiando al transporte colectivo, se multiplicaron las tiendas sindicales y los mecanismos para disimular el costo en los productos, evitando la excesiva intermediación. En fin, se trató de proteger la economía de los sectores sociales populares más vulnerables a la crisis y de no incidir violentamente en una represión económica sobre los sectores medios, capaces de tomar iniciativas políticas fuera del marco global de dominación aceptado. En realidad se tuvo éxito en sostener la paz social, fuertemente amenazada por el colapso económico. No obstante, aunque la sociedad civil registró el impacto de la crisis económica y ésta no tuvo expresión directa en una crisis social o política inmediata, no se puede afirmar que no se hayan presentado indicios de descomposición social y de resquebrajamiento

<sup>47</sup> En el estudio "Dos años de recesión, sus consecuencias y perspectivas", Taller de Coyuntura de la Facultad de Economía, UNAM, marzo de 1984, p. 9, se habla de que el mecanismo fundamental para incrementar las ganancias de las empresas fue la renegociación de la deuda privada a través de FICORCA, lo que les permitió triplicar su flujo de efectivos entre 1982-1983; al cual hay que adicionarle la traslación de costos a los precios, junto con la permanencia de costos fijos o decrecientes del trabajo según el poder de negociación de los sindicatos de cada empresa.

político. Las esperanzas puestas en el nuevo gobierno duraron escasos meses, justo el tiempo necesario para que el sagrado ritual sexenal mostrara su verdadera fase, la de la dura crisis que el país tendría que cargar a costas —según los anuncios de los funcionarios que reiteraban las sentencias presidenciales. Los milagros se habían acabado; comenzaron los problemas de desabastecimiento de productos básicos y olas continuas de carestía provocadas por el ocultamiento de los alimentos, perpetrado por los comerciantes para especular con los precios y obtener ganancias elevadas. Desafiando las amenazas del gobierno se jugaba con las necesidades populares a sabiendas de que, en una economía de libre mercado, los controles de precios son una quimera.

En las urbes, el clima instaurado por la recesión económica y la inflación erosionaba la moral social y las ansias de sacar ventaja de los más incautos propiciaba un verdadero ambiente de psicosis y de tensión social que llenaba de inseguridad a los sectores altos y medios de la población, que percibían la rápida descomposición social de los sectores marginales y lumpenproletarios. Temerosos por sus propiedades y sus vidas clamaban por una reorganización de la seguridad civil y ciudadana, mientras los robos, los asaltos a mano armada, la criminalidad y la violencia social crecían y junto a ellos las grandes fortunas de los traficantes, contrabandistas y mafiosos que, amparados o al margen de la ley, se escudan en las capas más vulnerables de la población que realizan para ellos el trabajo sucio.

En el campo, la recesión tuvo menor impacto y la producción agropecuaria hasta se recuperó de su caída en 1982; no obstante, en las regiones de economía campesina los productores siguieron empeorando sus condiciones ya precarias, por lo que el gobierno, para no perder su base de sustentación política más sólida, pensó en reestructurar sobre otras bases el malhadado SAM y en incrementos moderados a los precios de garantía.

La inflación persistente, aunque menor que la de 1982 y el desempleo creciente, causaron mayores estragos en el D. F., Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Villahermosa, Mexicali y Tijuana, lugares de concentración industrial y del comercio en tiempos del auge petrolero. En estos sitios el costo de la alimentación, de la vivienda y del vestido se incrementó en más del 300%, mientras los sueldos y salarios tanto de los obreros como de los profesionales y burócratas permanecieron prácticamente estancados o disminuyeron sensiblemente.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Aunque no se dispone de cifras oficiales, se estima que para 1983 la participación de los asalariados en el ingreso global desciende a niveles inferiores a los de la década de los años sesenta. Si estimamos el valor adquisitivo que tiene el dinero en la actualidad y los satisfactores que podían conseguir fácilmente los sec-

Por su parte, los estados fronterizos del norte que poco antes habían disfrutado de condiciones económicas de excepción, con la recesión inflacionaria y las medidas para contrarrestarla sufrieron severas mermas en sus transacciones comerciales con Estados Unidos; hecho que no sólo repercutió en los niveles de vida y empleo de sus habitantes sino que contribuyó a profundizar las desigualdades sociales ya existentes y a generar descontento social y desconfianza en el nuevo gobierno. Las primeras elecciones de junio de 1983 fueron un buen barómetro que indicó al PRI y por ende, al gobierno, que la crisis económica podía causar estragos políticos de gran magnitud, de no actuar de modo inmediato con programas especiales de repercusión económica y ayuda en el abastecimiento de productos básicos y con obras de infraestructura de beneficio social como las que los funcionarios y priístas emprendieron diligentemente, además de la restructuración interna de las instituciones promotoras del voto por donde el gobierno conquista el apoyo político a su gestión.

Pero la crisis iba más a fondo; ya en los meses de mayo y junio, dadas las crecientes dificultades para el despegue de la economía, los estragos fueron sentidos por las clases sociales más dinámicas del país: los obreros industriales, los asalariados y profesionales de la empresa privada y por las burocracias asentadas en los sectores modernos del país. Las tensiones sociales fueron creciendo y las demandas por mejoras en las condiciones de vida fueron haciéndose opinión pública. Aún más, los sectores medios urbanos y los obreros que conforman los respectivos sindicatos independientes y de gobierno empezaron a manifestar su descontento en contra de la política gubernamental por la vía institucional mediante paros y huelgas<sup>49</sup> que intentaban forzar al gobierno a levantar los topes a los aumentos salariales pactados con el Fondo Monetario Internacional y base de la estrategia de recuperación de corto plazo diseñada por el poder establecido. La respuesta gubernamental fue dilatoria, pues replicó con el Plan Nacional de Desarrollo, que en lugar de ser una realidad inmediata de contención de la crudeza de las condiciones precarias en las que se encontraban los trabajadores y las grandes mayorías del país era una esperanza lejana de un futuro mejor que alentaba "al fortalecimiento de las instituciones democráticas, al vencimiento de la crisis y a la recuperación de la tores medios y populares en la década anterior y a los que ahora les es imposible aspirar, el deterioro es aún mayor.

<sup>49</sup> En el mes de mayo se iniciaron una serie de paros y huelgas en todo el país para protestar contra la política económica del gobierno y por aumentos salariales entre 50 y 100%. Los resultados de la mayoría de estos esfuerzos fueron mayores frustraciones, dadas las características de represión económica e indirectamente políticas que tomaron las negociaciones; sólo unos cuantos consiguieron incrementos del 15% en promedio, que fueron inmediatamente absorbidos por la

capacidad de crecimiento del país, para luego iniciar los cambios cualitativos que el país requiere en estructuras económicas, políticas y sociales” (SPP: 1983). Los intelectuales criticaron duramente al Plan, mientras que los obreros tuvieron que contentarse en los casos más afortunados con un aumento salarial mínimo inmediatamente absorbido por la inflación de 100% que no parecía ceder y por la recesión que continuaba aniquilando a la planta productiva.<sup>50</sup>

En efecto, si en el mes de mayo las presiones inflacionarias amainaron por un momento, en los meses de julio y agosto volvieron a recrudecerse. La fuerza del capital financiero internacional y sus aliados internos, los comerciantes y los sectores monopólicos de la industria, volvieron a insistir en nuevas alzas de los precios y en una devaluación<sup>51</sup> que incrementaría los dividendos de los sectores exportadores<sup>52</sup> al incrementar las ventas. El gobierno, atrapado entre dos fuegos, intentaba mediar, reiterando por medio de sus funcionarios que la crisis estaba controlada y que ya se había tocado fondo.<sup>53</sup> No obstante, los grupos monopólicos seguían por la vía inflacionaria y la especulación en los precios, acumulando poderío económico y disputando palmo a palmo el poderío político a la fracción burguesa industrial nacional que lo detentaba aún junto con la hegemonía social.

En estas circunstancias se esperaba que el primer informe del nuevo gobierno marcara una tregua para los sectores populares que habían absorbido todo el peso de la crisis. Esto daría al bloque en el poder mayor capacidad para recuperar las fuerzas políticas que había ido perdiendo, lo que le permitiría seguir detentando su hegemonía declinante. De no ser así, las amarras del yugo de subordinación podrían inflación que en el mes de mayo alcanzaba el 100%.

<sup>50</sup> Un estudio de Banamex comentado en *unomásuno*, 14 de junio de 1983, p. 7, afirmaba que “la disminución de la demanda interna, la escasez de materias primas, el alto costo de los financiamientos y el control de precios han colocado al sector industrial mexicano en una grave crisis y que sólo trabaja al 65% de la capacidad instalada, y aun cuando se espera un descenso del índice de desempleo no hay perspectivas favorables para mantener la ocupación en los renglones de construcción, automotriz y cervecero”. Por su parte, Bancomer, en *Panorama Económico*, afirmaba que “la producción automotriz ha caído en un 43% en los tres primeros meses del año y la rama de los tractocamiones lo hizo en un 88%; por lo que las perspectivas no son favorables para el resto del año”.

<sup>51</sup> En los primeros días de agosto, para frenar las presiones devaluatorias el Secretario de Hacienda y Crédito Público aducía variadas razones para descartar una devaluación del peso mexicano. *unomásuno*, 7 de agosto de 1983, p. 8.

<sup>52</sup> Cf. Declaraciones del presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), *unomásuno*, 22 de agosto de 1983, p. 7.

<sup>53</sup> En realidad la política nacional había sido exitosa para la banca internacional. Por querer pagar la deuda, a toda costa se obligaba al país a mantener un crecimiento negativo de un 4% en la producción local de la economía.

ceder, no tanto para sacudir el peso de la dominación política que sustenta la explotación de los sectores proletarios sino para buscar, en la unidad con los movimientos sindicales independientes, nuevas alternativas para consolidar su capacidad de movilización y renovar sus luchas para enfrentar, con autonomía de acción, la escalada de las fracciones financieras monopólicas.

Efectivamente, el informe fue conciliador, en él se reconocía que la crisis aún no había sido superada pero que se la mantenía bajo control, gracias a la política de negociación legal y pacífica de los conflictos que rechaza todo tipo de autoritarismo o dictadura. Se justificaban las drásticas medidas para frenar la inflación y el costo social de las mismas porque “de no responder al desafío de la crisis, análogo en lo económico a tiempos de guerra”, se hubiera incurrido en el caos y el retroceso. Se llamaba a la unión para vencer la crisis y se convocaba, una vez más, a la consolidación de la democracia mediante el respeto a las libertades individuales, al derecho social, al pluralismo ideológico y al pluripartidismo (Madrid, 1983: I-VIII). Más allá de las palabras, la intervención presidencial justificaba la estrategia contenida en el Programa Inmediato de Recuperación Económica y la detallada en el Plan Nacional de Desarrollo; mostrando sus logros en materia de descenso inflacionario, consolidación financiera e indemnización bancaria.

La crisis generada por el Estado, entendido como el campo de equilibrio dinámico de fuerzas políticas contrapuestas y antagónicas y como el rector del proyecto nacional hegemónico que sostiene el poder en México, era asimilada por él mismo dentro del juego político de las fuerzas sociales que lo respaldaban; las desigualdades y los desplazamientos estaban presentes en toda su agudeza, pero no habían provocado el colapso político; era una crisis estatal, cuyas salidas aún no se visualizaban claramente. Pero el núcleo burgués industrial nacional parecía recomponer sus alianzas en la cumbre, adjudicando al capital y al comercio monopólico internos, así como a los núcleos financieros internacionales, un papel más destacado en el espectro de las alianzas del bloque. La insistencia en la estrategia así lo sugería, faltaba que las condiciones reales de la economía y de la lucha política concreta los permitieran o contradijeran. En todo caso, tampoco se olvidaba que en este trance una alianza más estrecha con la burocracia política tendría que ser escrupulosamente cuidada y seguir manteniendo a todo precio el apoyo de los sectores obreros, campesinos, medios y populares a partir de aumentos salariales, reformas administrativas y de justicia, proyectos y programas de apoyo al agro, al empleo, a la vivienda, a la educación e insistiendo en la renovación moral y en el nacionalismo revolucionario.

Así pues, en los inicios del último trimestre de 1983 se percibía claramente que el aspecto principal de la contradicción de la formación social mexicana en crisis estaba en la economía. El núcleo burgués industrial nacional, apoyado en el Estado y en su eficiente burocracia apostaba —calculando las posibilidades de éxito con mucha prolijidad— a la terapia de la cura intensiva mediante la estrategia del *shock* en la economía y la participación amplia en la política. Una vez más, el consenso social, la legitimidad institucionalizada, es decir, las mediaciones sociales manejadas por el régimen político eran puestas en acción para ser probadas en su fortaleza. El reto era perseverar para detener la inflación y la recesión de la economía, cuidando de no profundizar en los aspectos ya salientes de la crisis social y política que se venían expresando como conflictos secundarios en el ámbito de la sociedad civil. Por ello las luchas en la economía y en el interior del bloque continuaban entre las distintas fracciones de la clase dominante.

Ya antes del informe presidencial las presiones de los comerciantes, exportadores y especuladores financieros se hicieron presentes y luego arremetieron hasta obligar al gobierno a una nueva devaluación. Ésta se materializó el 23 de septiembre con un deslizamiento diario de 13 centavos del peso frente al dólar. A menos de un año del nuevo gobierno, era la segunda. El “realismo económico” cayó sobre las espaldas de las masas trabajadoras dispuestas a perder poco a poco el valor de sus salarios reales a cambio de la seguridad en sus fuentes de trabajo. La medida no tardó en generar un nuevo incremento de los precios de los productos que “en agosto sólo subieron 3.9%” según el Banco de México. La inflación volvió a repuntar, contradiciendo las cifras oficiales que la estimaban para fines de 1983 entre 75 y 80%,<sup>54</sup> hecho que ponía en peligro la leve recuperación de la recesión que tanto los organismos internacionales como el gobierno ya habían anunciado para fines del año. Los altos costos sociales anunciados por el gobierno en el frío y mesurado informe de septiembre volvían a presentarse incidiendo en las condiciones de vida de los trabajadores y de los sectores medios que en los momentos de auge petrolero habían tenido acceso a muchos de los satisfactores propios del nivel de vida del vecino país del Norte y que a fines de 1983 tenían que contentarse con las aspiraciones limitadas a los niveles de vida de los países sudamericanos de menor desarrollo económico. En octubre las cosas no mejoraron, los industriales exigían la liberación de los precios, la reducción de las tasas de interés y apoyos financieros para evitar el co-

<sup>54</sup> Por su parte la CEPAL calculó 91.9% de inflación para México en 1983, o sea, 7% menos que en 1982, calculada en 98.8%.

lapso de la planta productiva. La industria ineficiente, protegida por el gobierno, sin gastos gubernamentales que fomenten las inversiones estaba paralizada y la estrategia de fomento de la inversión privada era casi nula, a excepción de la inversión extranjera directa que por los 48.7 millones colocados en el primer trimestre de 1983 había expatriado, en utilidades y regalías, 220.5 millones; lo que significaba que por cada dólar ingresado al país salieron 4.5 en el mismo lapso.<sup>55</sup> Pero no le quedaba al gobierno más alternativa, de acuerdo con sus planes, que continuar fomentando la inversión extranjera. La reunión en Cancún de 100 presidentes de empresas transnacionales donde se anuncia la creación de la Subsecretaría de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología y los Lineamientos sobre Inversiones Extranjeras que aparecerían a mediados de febrero de 1984<sup>56</sup> nos dan la razón de estas preferencias. Mientras, los sectores asalariados y campesinos reciben las promesas de un Programa Alimentario y de alzas salariales para finales de año, que sonaban como burla sarcástica cuando a fines de octubre se dieron nuevos incrementos al precio de la gasolina y el diesel, los que disparan inmediatamente los precios de los demás artículos, en especial los de consumo diario. El gobierno, con la estrategia ya sabida, anuncia multas y castigos pero otorga los permisos de alzas a lo largo de noviembre y diciembre. Por su parte, los sindicatos independientes y el liderazgo sindical gobiernista protestan por las medidas, exigiendo aumentos inmediatos en los salarios de más de 60%, lo que sirve de pretexto para que se especule con los precios y para activar aún más el círculo inflacionario y recesivo.<sup>57</sup>

Así, a un año de gobierno, el Presidente y los secretarios de Hacienda y Programación anuncian reiteradamente que la crisis estaba controlada pero que la etapa más dura del reordenamiento económico vendría; sin embargo, se apresuraron a explicar que en 1984 se reanudaría el crecimiento económico.

<sup>55</sup> Véase información del Banco de México y del Centro de Estudios del Sector Privado y del Organismo coordinador de la Banca Nacionalizada aparecida en *unomásuno*, 5 de octubre de 1983.

<sup>56</sup> *unomásuno*, 10, 11 y 20 de noviembre de 1983, declaraciones de los funcionarios del gobierno sobre este particular. A propósito de los "Lineamientos sobre inversiones extranjeras", véase nota 17.

<sup>57</sup> Según un extenso análisis de la CTM y el CT se previó que la inflación llegaría a 130% a fin de año. *unomásuno*, 14 de diciembre de 1983.

*b) Segunda etapa de reordenamiento económico, balances y perspectivas, 1984*

La experiencia de un año de gobierno tuvo un gran significado económico pero sobre todo político, porque permitió percibir más de cerca el juego de fuerzas sociales que desató la crisis y que el régimen actual afrontó con habilidad. Pero según él mismo declaraba en sus intervenciones, el juego de las contradicciones seguiría siendo duro e intrincado en 1984, año de la segunda etapa.

En efecto, la crisis de la economía internacional y del capitalismo en su sector hegemónico, Estados Unidos, estaba lejos de resolverse, aunque se han visto signos de recuperación como son: una tasa inflacionaria inferior al 4% —la menor de los últimos 11 años—; una tasa real de crecimiento de la economía de 4.5% y un nivel de desempleo del 8%, luego del tope del 10.3% alcanzado en 1982. Todo ello, logrado a partir de un altísimo déficit presupuestal mantenido en equilibrio a través del incremento constante en las tasas de interés. Lo que no es precisamente un augurio para la recuperación de la economía mundial ni menos aún para la economía mexicana, pues ésta se verá constantemente sometida a mayores presiones en el cumplimiento de la segunda etapa de reordenamiento económico dado el constante crecimiento del servicio de la deuda externa y las crecientes dificultades para su renegociación.

En el plano nacional, la crisis estructural de la economía no ha sido superada; los modestos logros alcanzados y expuestos en tono medurado aunque excesivamente técnico en los informes presidenciales y de los funcionarios no dejan de expresar el aire satisfecho de justificación del político,<sup>58</sup> lo que constituyó el leitmotiv de los discursos de 1983 y un asomo de triunfalismo, que no de optimismo, por los futuros éxitos de la misma política ensayada.<sup>59</sup>

A manera de balance de la primera etapa de gobierno y como punto de partida de la segunda etapa que estamos viviendo, cabe una sucinta evaluación de los alcances positivos de los puntos nodales de la política económica del PIRE.

<sup>58</sup> Véase las declaraciones del Presidente y de los funcionarios en *unomásuno*, 28 de octubre, 23, 25 y 28 de noviembre de 1983.

<sup>59</sup> A juzgar por los “Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Egresos de la Federación para 1984”, en *unomásuno*, 17 de noviembre de 1983, la política de la primera etapa continúa vigente con ligeras modificaciones en el gasto público que se incrementa en relación con 1983 para fomentar la inversión, proteger la planta productiva y el empleo.

En lo que respecta a la inflación, considerada como el primer enemigo a vencer, según las cifras oficiales del Banco de México ésta descendió en casi 21%, puesto que en 1983 fue de 98.8%; la CEPAL habla sólo de un descenso del 7%.<sup>60</sup> De todos modos, el éxito no es desdeñable a juzgar por lo que ha sucedido en Bolivia, Brasil y Argentina. No obstante, el logro es poco significativo si consideramos la restricción escalonada del circulante, la drástica reducción de la demanda y la fuerte depresión del crecimiento de la economía hasta -5%. Todo ello, sin tomar en cuenta la fuerte reducción salarial de 4.7% en relación con la de 1982 que fue de -53%. Dicho en otros términos, si extrapolamos el monto de la masa salarial contra el índice de precios tenemos que la tendencia de su crecimiento anual está por debajo del alza en los artículos de primera necesidad para 1982 en -2.6% y para 1983 -33%, tomando 1971 (5%) como año base. Por otro lado y abundando en el desfaldo de la fuerza de trabajo que ha significado la inflación hasta 1983, si dividimos el monto de la masa salarial por el número de habitantes del país tenemos que a cada mexicano que recibía 3 100 pesos en 1971 le corresponden, en 1982, 4 600 y en 1983 sólo 2 900 pesos.

Lo anterior nos permite afirmar que la política económica aplicada al menos hasta fines de 1983, con liberación constante de precios y restricciones salariales e incentivos a los empresarios nacionales y extranjeros para invertir, dio lugar al aumento de las tasas de ganancia y a la consolidación a un más alto nivel de los sectores industriales, comerciales y financieros monopólicos que pudieron resistir la depresión del aparato productivo y pelear en el mercado contra los más débiles, que sucumbieron; pues aquellos virtualmente impusieron sus condiciones a partir de diferentes estrategias manejadas en la coyuntura.

En lo que respecta a los logros en la balanza comercial, del 4% en 1982 al 7.6% en el mismo año según cifras oficiales, éstos se debieron principalmente a la restricción de las importaciones que según el Banco de México disminuyeron para bienes de capital en un 63%. Con razón el presidente de la Canacindra se quejaba "porque las insuficientes divisas para la industria apenas alcanzarán para cubrir el 60% de las importaciones que necesita la industria".<sup>61</sup> Por su parte, el Departamento de Estudios Económicos de la misma agrupación afirmaba enfáticamente que "la falta de integración y la dependencia externa se presentaban como la raíz de la problemática de la industria". En efecto, la férrea dependencia traducida en la necesidad de insumos externos para que las plantas industriales trabajen frente a la escasez

60 Véase nota 54.

61 *unomásuno*, 28 de febrero de 1984.

y alto costo de las divisas es sinónimo y explicación del estancamiento de la economía mexicana en los inicios de 1984.

En lo que respecta a las exportaciones estábamos lejos del proyecto loable de disminuir la petrolización de nuestra economía, puesto que el oro negro sigue ocupando el 77% del total de las exportaciones, mientras las manufacturas alcanzan sólo el 13% y los productos no petroleros el resto. Cabe, no obstante, señalar que los esfuerzos por diversificar las exportaciones para 1983 han dado como resultado un crecimiento del 10% para las no petroleras, frente a un incremento de menos de 1% para las petroleras; pero nos queda la duda de si, dadas las condiciones reales del comercio mundial y la ardua competencia que nuestros productos deben soportar en el exterior, sólo las industrias filiales de las transnacionales: automotriz, maquinaria y productos químicos son las que han podido aumentar sus ventas en el exterior y, por ello, los beneficios, descontando las regalías y utilidades, fueron muy exiguos para el desarrollo nacional.

Por lo que podemos apreciar en el análisis, las vicisitudes del sector externo de la economía destacan más que sus éxitos contables; no obstante, el país ya dispone de reservas monetarias, mientras que en diciembre de 1982 eran casi nulas. En realidad, éstas son el producto del deterioro de las condiciones de vida de la gran mayoría de los mexicanos. Según datos periódicos de la banca nacionalizada los ahorros crecen constantemente, pero con las altas tasas inflacionarias los beneficios del dinero a intereses, producto del sacrificio de los sectores medios, en áreas de una seguridad ficticia, son devorados por la inflación, más alta que los créditos alcanzados y que perciben; de todos modos, no les queda otra alternativa que convertirlos en dólares o gastarlos rápidamente en viajes o diversiones.<sup>62</sup> Los sectores obreros y populares, que por definición no ahorran pero sí gastan más de lo que se les remunera por la riqueza que aportan al país, en definitiva son los que han cargado todo el peso de la inflación y de la recesión de la economía, que continúa en el primer trimestre de 1984. La nueva Carta de Intención que el gobierno mexicano firmó en los primeros días de enero de 1984 atestigua la aseveración anterior y nos muestra, de modo palmario, que la dureza de la crisis seguirá en el curso de 1984, sin visos de que las condiciones de deterioro sean menores que las que se dieron en 1983. Al contrario, como ya afirmamos anteriormente, las condiciones internacionales actúan en contra de los sacrificios que los trabajadores mexicanos han realizado para superar la crisis, es decir, disminuir la inflación y pagar la deuda externa cuyos

<sup>62</sup> En las vacaciones de julio, según datos de un funcionario de la Secretaría de Turismo, el porcentaje de viajes al extranjero creció casi 7% respecto del año anterior. *unomásuno*, 14 de julio de 1984, p. 8.

servicios siguen creciendo con el incremento de las tasas de interés de la banca estadounidense. De donde se entiende que el capital financiero hegemónico seguirá consolidando su posición mundial y esforzándose por anudar alianzas más estrechas con sus subalternos en los otros países capitalistas y México difícilmente puede escapar de esta tendencia. Es verdad que las condiciones en las que se firmó la primera Carta de Intención han variado un poco: el colapso financiero se presenta como un ligero superávit pero las condiciones globales de la economía muestran una paralización mayor que en 1982 por lo que, a nuestro criterio, las posibilidades de mayor independencia respecto de las recomendaciones del Fondo son menores que en 1982. De ahí que la insistencia en el abatimiento de la inflación por medio de la política del *shock* sigue vigente, cancelándose las expectativas de una recuperación del crecimiento como se había estimado. En esta circunstancia las alzas de la tasa de interés de los bancos de los Estados Unidos, a pesar de la promesa de Reagan y en contra de los pedidos de los países europeos y de los deudores encabezados por México y Colombia<sup>63</sup> de morigerar las ansias de ganancia, podría provocar desequilibrios sociales; lo que haría más difícil la recuperación de la hegemonía imperialista a nivel mundial. Resulta pertinente en este momento evaluar la tan cacareada conducta ejemplar de México en relación con la negociación y el pago de la deuda internacional, esgrimida como arma de justificación cuando el Fondo Monetario, empujado por los capitales financieros internacionales, quiere endurecer las condiciones de negociación y no admitir convenios multilaterales de los países deudores.

Ahora bien, desde el inicio de la presente gestión uno de los objetivos fundamentales asumidos por el gobierno gira en torno al pago de la deuda externa, que en términos reales es incancelable y, además, aumentada arbitrariamente por la carga del pago a los servicios mediante el alza de las tasas de interés por parte de los acreedores; todo ello a costa del sacrificio del pueblo de México.

En verdad, fue encomiable y hasta premiada la diligencia del Secretario del ramo como hábil negociador de la deuda y del pago de los intereses que fueron de aproximadamente 10 mil millones de dólares en 1983; pero esto no justifica ni quita que el monto sea elevadísimo, pues cubre casi todo el superávit de la balanza comercial de 1983; lo que significa un freno al crecimiento y un deterioro del valor social del trabajo mexicano que se esfuma hacia el exterior. Cabe destacar que los ingresos del gobierno federal se componen principalmente de

63 "Documento Base del Acuerdo de Cartagena", *unomásuno*, 22 de julio de 1984 y "Respuesta de los banqueros", *ibid*, 26 de junio de 1984.

impuestos indirectos tales como el IVA, impuestos sobre la producción y servicios los cuales suman en porcentaje el 30% de los ingresos federales que castigan fuertemente a los sectores de menores ingresos y es con ellos, principalmente, que se nutre la producción nacional, en comparación con sólo el 24% del impuesto directo a la renta y el 46% de los ingresos no tributarios, es decir, los ligados a las ventas (SPP, 1984). Ello significa que indirectamente el servicio de la deuda está también cancelando las posibilidades de ingresos reales para fomentar el mercado interno que es, de todas, la más segura fuente de recuperación de la recesión.

A todas luces, la política económica encaminada al pago de la deuda externa con renegociaciones unilaterales, que con el incremento de las altas tasas de interés sigue presionando sobre los ingresos del país, tiende a cancelar todas las perspectivas de salida de la crisis inflacionaria y recesiva. Menos mal que parece que este grave error de apreciación económico-político está siendo corregido por la presión de corrientes progresistas en el interior de la burocracia y tecnocracia que sigue fiel a la ortodoxia del capital financiero. Más aún, el gobierno poco a poco va modificando la tendencia a mantener en forma equivocada un saldo favorable en la balanza de cuenta corriente (-1.6 en 1982 y 2.2 en 1983) porque esto significa, dada la estructura global de la economía mexicana, extremadamente dependiente del sector externo, la prolongación de la depresión industrial que experimenta el país.

Cabe explicar que los cambios en la política económica que se están resintiendo a pesar del apego a las indicaciones del Fondo no se deben a la visión certera de la tecnocracia y burocracia políticas sino a las presiones de los sectores obreros, populares, medios y profesionales quienes junto con los campesinos —dentro de la legalidad e institucionalidad vigentes— externaron sus protestas, como nunca antes se había visto, el 1 de mayo y un mes y medio después manifestaron por escrito su rotundo no a la política equivocada del gobierno.<sup>64</sup> Por eso es que resulta inconcebible pensar que no reporta ningún beneficio político el declarar que el alza de las tasas de interés, que afecta directamente la deuda externa y el pago de la misma, no afecta negativamente los proyectos de recuperación del país.<sup>65</sup> Técnicamente, aunque no políticamente, existen diferentes medidas para contrarrestar los efectos desfavorables que el incremento en las tasas de interés causa en el servicio de la deuda y, por tanto, altera más aún la

64 “Demanda del Congreso del Trabajo”, “Respuesta del Gobierno al Congreso del Trabajo” y la “Negativa oficial a las peticiones del Congreso del Trabajo”, *unomásuno*, 14, 22 y 27 de junio de 1984.

65 *Ibid.*, 28 de junio de 1984.

salida de la inflación recesiva en que el país se encuentra al inicio del segundo semestre de 1984; hecho que contribuye a alterar la correlación de fuerzas en el interior del bloque. Contraer más el gasto público, al mismo tiempo que facilitaría la estabilidad de precios deprimiría aún más la recesión, reduciría el empleo y, por ende, contraería aún más el precio de la fuerza de trabajo mediante una nueva reducción de los salarios reales. Esto es lo que se había llevado a cabo; pero la señal del primero de mayo y el asesinato de Manuel Buendía, seguramente perpetrado por la CIA, a nuestro criterio, inclinaron a la burocracia reticente a aflojar las amarras que la ligan al capital financiero, cuya presión política se está haciendo sentir fuertemente en el interior del bloque en el poder. Los riesgos de pérdida acelerada del consenso social necesario para superar la crisis y para conservar la hegemonía política, cuya piedra de toque serán las elecciones de 1985 (para las cuales el PRI se prepara con una renovación interna, que es más en las palabras que en el interior de los atomizados feudos de esa burocracia mediadora y mediatizadora entre la sociedad civil y el Estado) eran demasiado probables.

Se han seguido incrementando los ingresos del sector público con el alza de precios en las tarifas y servicios públicos, con incidencia en los sectores más castigados por la crisis, pero las presiones obreras, populares y campesinas expresadas en los paros y huelgas —que se han producido y se han hecho opinión social en el documento contradictorio del Congreso del Trabajo— acabaron, al menos hasta fines de año con los incrementos en algunos servicios considerados como necesarios para una política realista de precios, según estimaciones del gobierno. No obstante, los que han seguido aumentando castigan, no a los industriales, comerciantes y financieros que pueden trasladar los costos de los mismos vía precios a los productos, sino a la mayoría de la población consumidora.

Otro intento técnico y burocrático-administrativo sin mucho éxito, gracias a las presiones de la burocracia sindical y a la visión realista de los sectores independientes unidos en la adversidad, fue la imposición fiscal a las bonificaciones y compensaciones salariales. Al contrario, se está ya elaborando una forma para desagrar aún más el impuesto a los ingresos de los trabajadores cautivos en la burocracia o en los servicios del gobierno. Sin embargo, no se ha pensado en hacer efectiva la bandera de la clase obrera, impulsada también por ciertos sectores progresistas y por la izquierda, de un impuesto directo al patrimonio y a la riqueza que tendría que hacerse efectivo dentro de una reforma tributaria integral. Tal vez la intención del gobierno sea realizarla como reforma estructural a largo plazo; pero, como decía Lord Keynes y con mucha razón, “en el largo plazo estamos todos muertos”.

Finalmente, parece que el efecto de las contradicciones y presiones sociales de los sectores obreros, campesinos, medios y populares que atraviesan los aparatos de la burocracia estatal y política al llegar el centro neurálgico del Estado, donde la hegemonía de la fracción burguesa industrial nacional está en juego frente a los embates de las fracciones financieras monopólicas locales aliadas a las internacionales, inclinó el fiel de la balanza para equilibrar el incremento de las tasas de interés mediante el pequeño incremento del gasto público. Así, con un paulatino crecimiento del déficit fiscal se mantendría el crecimiento económico previsto y se daría alguna tregua a la recesión; una vez que la tecnocracia, al toparse con la realidad de la lucha de clases frente al dogma, entienda que el incremento del gasto productivo que genera empleos e incrementa el salario no es inflacionario. Con ello, las condiciones pactadas con el Fondo van siendo conculcadas y en esta batalla, que no es el fin de la guerra, la fracción burguesa industrial hegemónica (apoyada en las fuerzas sociales mayoritarias uncidas al yugo priísta y representadas en el gobierno por las burocracias subordinadas a las altas burocracias y tecnocracias estatales que la expresan y representan en el bloque dominante) sigue reinando sobre las fracciones comerciales, industriales y financieras monopólicas y sus burocracias e intelectuales orgánicos.

Por el momento, parece difícil que la última opción se cancele sin nuevas y largas batallas, pues la burocracia y tecnocracia que sostienen en la cumbre del poder a la fracción industrial nacional siguen apoyándose en los sectores obreros, campesinos medios y populares que son la carne de cañón que aguanta la refriega.

Estos últimos, uncidos al gobierno en el interior del PRI, esperan la XII Asamblea Nacional del PRI que tendrá necesariamente que cumplir el milagro de la renovación de la vieja maquinaria electorera, pero aún más —y esto sería casi pedir un imposible— orientar las políticas de su gobierno en beneficio real de los sectores que lo mantienen en el poder. De no ser así, la capacidad hegemónica ya mermada seguirá en descenso y el peso de la dominación política se hará sentir mientras la escalada de las fracciones monopólicas a la cumbre del poder se irá materializando. Así, estaríamos asistiendo al final de una crisis política interna del mismo sistema de dominación y hegemonía en el interior de la formación social mexicana.

Ahora bien, a dos meses del segundo informe dentro de la crisis, al parecer las contradicciones políticas están alcanzando un índice mayor de relevancia aunque sin superar a las económicas; por ello las fracciones financieras integrantes del bloque en el poder, pero no hegemónicas, con toda seguridad seguirán intentando liquidar toda posibilidad de organización popular nacionalista y revolucionaria por-

que, con ella, su proyecto de desnacionalización, de represión económica y política —que esconde y fundamenta una explotación capitalista más intensa, para superar la crisis interna y la que conlleva la internacionalización del capital a escala mundial— no podrá alcanzar el consenso social que necesita para arraigarse en México.

En fin, las luchas de la fracción burguesa industrial nacional —cuya hegemonía parece estar en descenso pero que aún dispone de la fuerza política para salvaguardar su proyecto, superando la crisis económica— contra las fracciones comerciales, industriales y financieras monopólicas, ligadas o dependientes del capital transnacional, no se podrán dar sin el concurso de las grandes mayorías de la población. Por lo que, para que su proyecto pueda hacerse efectivo, parecen ser necesarias ciertas reformas de fondo en la economía y en la política que aún no se vislumbran a mediados de 1984. En el caso de que las tendencias recesivas y la inflación sigan profundizándose y, con ellas, el mayor deterioro económico y social de estos sectores, no parece previsible un desenlace violento de las fuerzas sociales en un corto plazo, pero sí un deterioro cada vez más profundo de las instituciones estatales que constituyen, hasta ahora, los puntales del consenso social que los diferentes gobiernos han tratado de preservar y consolidar mediante políticas económicas de gasto social prioritario. Todo ello como fórmula eficaz para obtener apoyo directo de las grandes mayorías a cambio de su control y dirección política. Al “realismo económico” puesto en marcha como bandera del presente sexenio (entendido como mecanismo para restaurar el libre juego de las fuerzas del mercado pero que en realidad resulta ser el camino más fácil para que las fuerzas monopólicas nacionales y extranjeras, estructuralmente más fuertes que las otras, obtengan el señorío en la economía y luego en toda la sociedad) cabe también oponer “el realismo político” para fortalecer a las fuerzas sociales más debilitadas: las grandes mayorías populares. De otro modo, no es nada extraño que en el escenario futuro de las luchas por el poder, el consenso social se debilite y empiecen a vislumbrarse en el horizonte de la formación social mexicana no tanto las fuerzas de la represión económica ya presentes, sino las fuerzas desnudas de la dominación, por largo tiempo escondidas en un Estado corporativo y populista. Hecho que repercutiría necesariamente en desequilibrios de extrema gravedad que podrán romper la ya larga estabilidad del régimen sociopolítico imperante.

**Bibliografía**

- Ayala, José, José Blanco, Rolando Cordera *et al.*: (1980), "La crisis económica: evolución y perspectivas", en Pablo González Casanova y Enrique Florescano (coordinadores), *México, Hoy*, México, Siglo XXI.
- Banco de México: (1982), "Comunicado del Banco de México", en *Comercio Exterior*, vol. 32, num. 3, marzo.
- Basáñez, M.: (1981), *La lucha por la hegemonía en México, 1968-1980*, México, Siglo XXI.
- Bueno, Gerardo *et al.*: (1977), "Diagnóstico de la economía mexicana", en *Opciones de política económica*, México, Tecnos.
- Ceceña Gámez, J. L.: (1970), *México en la órbita del capital imperial*, México, El Caballito.
- Cordera, Rolando: (1982), "Estado y desarrollo en el capitalismo tardío y subordinado. Síntesis de un caso pionero: México, 1920-1970", en *Investigación Económica*, núm. 123, México, octubre.
- Champoy Bonifaz, Alma: (1975), *Empresas multinacionales*, México, El Caballito.
- Evans, P. y G. Geriffi: (1980), "Inversiones extranjeras y desarrollo dependiente: una comparación entre Brasil y México", en *Revista Mexicana de Sociología*, año XLII, vol. XLII, núm. 1, enero-marzo.
- Fitzgerald, E. V. K.: (1978), "México: a new direction in economic policy", en *Bank of London and South America Review*, vol. XII, núm. 10, octubre.
- Giménez, G.: (1983), "La controversia ideológica en torno al VI informe de José López Portillo. Ensayo de análisis argumentativo", en *Revista Mexicana de Sociología*, año XLV, vol. XLV, núm. 2, abril-junio.
- González, E.: (1977), "La política económica de LEA 1970-1976: itinerario de un proyecto inviable", en *Investigación Económica*, nueva época, vol. XXXVI, núm. 3, julio-septiembre.
- Gramsci, A.: (1967), *La formación de los intelectuales*, México, Grijalbo.
- Gribomont, C. y M. Ramírez: (1977), "La política económica del gobierno de Luis Echeverría (1971-1976)", en *El Trimestre Económico*, núm. 176, octubre-diciembre.

- Gutiérrez, Aníbal: (1983), "Doce años de inequidad. La política económica: 1970-1982", en *Economía Informa*, núm. 100, Facultad de Economía, UNAM, enero.
- Labastida, Julio: (1972a), "Los cambios en los grupos dominantes", en *El perfil de México en 1980*, México, Siglo XXI.
- Labastida, J.: (1972b), "El régimen de Echeverría; perspectivas de cambio en la estructura de desarrollo y en la estructura de poder", en *Revista Mexicana de Sociología*, año XXXIV, vol. XXXIV, núm. 3-4, julio-septiembre, octubre-diciembre.
- Lerner, Bertha: (1983), "1983: la ruptura frente al populismo, el compromiso con la austeridad y la renovación moral", en *Revista Mexicana de Sociología*, año XLV, vol. XLV, núm. 2, abril-junio.
- Madrid, Miguel de la: (1982), "Mensaje a la nación del presidente Miguel de la Madrid", en *Comercio Exterior*, vol. 32, núm. 12, diciembre.
- Madrid, Miguel de la: (1983), "Primer informe de gobierno", en *uno másuno*, 2 de septiembre.
- Paz, María Emilia: (1982), "Crisis y expropiación, un análisis comparativo: 1938-1982", en *Revista Mexicana de Sociología*, año XLV, vol. XLV, núm. 2, abril-junio.
- Reynolds, C. W.: (1977), "Why Mexico stability development was actually destabilising (with some implications for the future)", en *Subcommittee on Inter-American Economic Relationships, Hearings* Washington, Congreso de los Estados Unidos.
- Secretaría de Comercio: (1982), "Boletín de prensa de la Secretaría de Comercio", en *El Nacional*, 2 de agosto.
- Shaikh, Anwar: (1983), "La actual crisis económica mundial: causas y explicaciones", en *Investigación Económica*, núm. 165, julio-septiembre.
- SPP: (1983), "Plan Nacional de Desarrollo, 1983-1988", en *Comercio Exterior* (suplemento), vol. XXXII, núm. 6, julio.
- SPP: (1984), "Fuente de ingresos del gobierno federal", en *Presupuesto de egresos de la federación para 1984*, México, SPP.
- Tello, C.: (1979), *La política económica en México, 1970-1976*, México, Siglo XXI.
- Villar, Samuel del: (1979), "El manejo y la repercusión de la economía mexicana en crisis (1976-1978)", en *Foro Internacional*, México, El Colegio de México, abril-junio.
- Villarreal, René: (1977), "The Policy Import Substituting Industrialization, 1929-1975", en José Luis Reyna y Richard S. Weinert (comps.) *Authoritarianism in México*, Filadelfia, Institute for study of Human Issues, serie política interamericana.
- Villarreal, René: (1981), "El petróleo como instrumento de desarro-

- llo y de negociación internacional. México en los ochentas”, en *Trimestre Económico*, vol. XLVIII, I, núm. 189, México, enero-marzo.
- Zermeño, S.: (1978), *México: una democracia utópica, el movimiento estudiantil de 1968*, México, Siglo XXI.